

Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

MARZO DE 2006

AÑO V • N° 69

2 PESOS

ISSN 1669- 9122



Situación Mundial

Hamas:
la intifada de las urnas

Irán
o el regreso de la crisis de los misiles

América Latina

Haití: nueva “esperanza”
para el pueblo haitiano

Banco Mundial: la culpa de lo que
ocurre en América latina es de los pobres

Argentina

Papeleras, petróleo e impuestos...
“y el abajo que se mueve”

Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL
MARZO DE 2006
AÑO V • Nº 69
ISSN 1669- 9122

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Santiago Juncal, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak, Sergio Zisman. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.

Responsable de la publicación: Alejandro Viegas

Fuentes consultadas: EE.UU.: *Wall Street Journal* (WSJ), *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP); *Usa Today* (UT). – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (EUn) – Colombia: *El Tiempo* (ET) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT-FSP) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN)

Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar

Números anteriores disponibles en www.geocities.com/informecon

En este número

Dedicamos Situación Mundial a novedades vinculadas al islamismo. La visión predominante difundida por los medios masivos de comunicación le atribuye una serie de valores antitéticos a los que los sectores dirigentes de las potencias hegemónicas gustan de exhibir como propios. Con esto se busca (y se logra) velar el conflicto político y las contradicciones que hacen del islamismo algo relevante: su capacidad de articular movimientos anti-imperialistas de masas. Entonces al primer encubrimiento que se hace sobre las políticas imperialistas (traducción de las necesidades del capital más concentrado de controlar territorios y recursos clave), se suma la tergiversación de las particulares reacciones nacionalistas a esas políticas. Será en esa clave que veremos el triunfo de Hamas en los comicios legislativos palestinos y la crisis en torno al programa nuclear iraní.

En América Latina, las políticas neoliberales con que el capital más concentrado amplió su dominio en la región durante los años '90, siguen sumando oposición en la región. Lo notamos en los procesos electorales de Haití, Costa Rica y Perú, donde obtienen apoyo masivo, candidatos abiertamente contrarios al neoliberalismo. Otras señales de retroceso parten de los mismos centros que lo difundieron en su momento. Por un lado, el Banco Mundial declara cuál es la clave de los problemas de la región: el alto nivel de pobreza impide el crecimiento. Con lo que sus recetas para el crecimiento (que iba a reducir la pobreza) nunca podrían haber funcionado. ¿Y quién tiene el gran bonete? Por otro lado, se advirtió desde Washington —apuntando al “populismo” de la región— que tener elecciones no es suficiente para hablar de democracia y desarrollo. Ciertamente, la medida en que EE.UU. aprueba o no quién está en el camino de la democracia y el desarrollo la dan sus propios intereses, con lo cual la queja revela una debilidad política impensable hace unos años.

En Argentina, tenemos al capital más concentrado a nivel mundial pugnando y presionando por las mismas políticas: lograr un ambiente amigable a la inversión extranjera—que se le permita la máxima “libertad de acción”. Lo que observamos es una disputa con sectores concentrados locales en torno a los términos de esa “libertad”, que por ahora se salda con el retiro de los franceses de Suez (agua) y con las renegociaciones en curso con los españoles a cargo de energéticas y comunicaciones. Vemos también la política de integración regional, específicamente las relaciones con Brasil, conducida por una alianza social entre sectores del capital y el movimiento obrero hacia la imposible búsqueda de la integración armónica en el marco de la competencia capitalista. En el plano político, el oficialismo sigue usufructuando los resultados de octubre: impuso su reforma del Consejo de la Magistratura y con ello desnudó las serias limitaciones de la oposición. Mientras, *el abajo que se mueve* impuso con organización y movilización la respuesta gubernamental en los municipios bonaerenses, en los campos petroleros de Las Heras y en la instalación de las papeleras frente a Gualeguaychú.

De todo esto, algo hay en lo que sigue...

Situación Mundial

4 La intifada de las umas

Irán o el regreso de la crisis de los misiles

La revolución y la “economía islámica”

Islamismos

La amenaza y las alianzas

América Latina

10 Situación Política

Elecciones en Haití: entre la “esperanza” y la dura realidad

Elecciones en Costa Rica: entre la apatía y llamados de atención por el TLC

Perú: Frente a la realidad latinoamericana el decir y el hacer de los principales candidatos a la presidencia

Las elecciones ya no son garantía de Democracia: sube la pelea entre

Venezuela y EE.UU.

Argentina

16 Pelea por las ganancias

Los *focos* externos de presión (y su respuesta)

El “territorio” privatizado. Lucha, fugas y alianzas

La realización de la alianza en el gobierno: proteccionismo en el comercio con Brasil. El capital y el movimiento obrero

La lucha en el interior de la alianza en el gobierno: la distribución de la riqueza

21 Coyuntura política

PJ bonaerense: Un apoyo incondicional, condicionado por donde se lo mire

Se reforma la Magistratura y cruje la oposición

Papelera, petróleo e impuestos... “y el abajo que se mueve”

Situación Mundial

2006 se inicia atravesado por hechos que marcan una intensificación de la conflictividad en Medio Oriente. A la crisis en torno al programa nuclear iraní se sumó, a fines de enero, el significativo triunfo del grupo islámico Hamas en las elecciones legislativas palestinas. Los medios “occidentales” apenas encontraron espacio para ofrecer sus sesudas interpretaciones de estos “desagradables hechos”, obligados a comentar la — aparentemente desconcertante— oleada de movilizaciones y protestas que sacudió al mundo con motivo de las “caricaturas de Mahoma”. A fines de febrero, las pujas por el control del estado iraní entre chiítas y sunnitas ya habían cobrado 1.400 vidas. La emergencia de esta guerra civil goza de una cobertura mediática que contrasta llamativamente con la que se dedica a Afganistán —otro caso frustrado de “normalización democrática” por la vía de la ocupación militar—, a pesar de que es evidente la incapacidad del gobierno títere afgano para controlar el territorio y el crecimiento de la insurrección, especialmente en el norte, controlado por el islamismo talibán.

El Cercano y Medio Oriente fueron áreas en que se dio de modo sostenido el esfuerzo de colonización por parte de las potencias que encarnaron históricamente las necesidades del capital. Su ubicación en el centro de las encrucijadas comerciales entre Europa y Asia y, más recientemente, sus fabulosas reservas energéticas, las transformaron en objeto de las políticas de penetración económica, sustentadas frecuentemente con la fuerza militar. Así, la historia nos muestra un escenario conflictivo, que cuenta con extraordinarias fuentes de resistencia a las políticas imperialistas, en tanto se desarrollaron en estas áreas las formas sociales y los contenidos culturales de lo que fue antaño una “civilización” competidora con aquella de raíz judeo-cristiana. Esto da verosimilitud a la formulación ideológica según la cual estamos frente a un “choque de civilizaciones”, entre un Occidente pluralista y laico y un Oriente con persistentes rasgos de totalitarismo y oscurantismo religioso.

Resulta obvio que el desarrollo de dicha formulación cobra impulso a partir de la emergencia y la consolidación del “islamismo” como opción política. En tanto todas las organizaciones que se autoproclaman “islámicas” parten de la propuesta de organizar sus sociedades conforme a las normas del Islam, resulta en apariencia sencillo postular una interpretación en clave religiosa.

Sin embargo, el islamismo, como un conjunto relativamente articulado de propuestas de “regreso al Corán”, no es un fenómeno nuevo: se remonta prácticamente a las etapas de la consolidación del imperio fundado por Mahoma. Lo que lo transforma en un dato político relevante —y al mismo tiempo en un “enemigo” para “Occidente”— es su capacidad de articular movimientos anti-imperialistas de masas. Es necesario indagar sobre el papel que cobra el islamismo como resultado de las contradicciones internas de las sociedades de clases, en cuya resolución el elemento religioso juega un

papel específico, aunque no autónomo. También, sobre el modo en que condiciona el juego de alianzas entre las potencias coloniales, ya que la percepción de que puede transformarse en una amenaza para las necesidades estratégicas del capital global da impulso a la sumatoria de fuerzas en torno a la potencia económico-militar hegemónica: los EE.UU.

En las páginas que siguen intentaremos realizar una primera aproximación al fenómeno del “islamismo” desde este punto de vista; por razones de espacio, nos limitaremos a abordar los casos del triunfo de Hamas en Palestina y la crisis diplomática en torno al programa nuclear iraní.

La intifada de las umas

“Sin importar lo que Hamas haga de ahora en más, este éxito posiblemente será recordado como la mayor victoria del islamismo político desde que el Irán del Ayatollah Komeini introdujo en el mundo moderna la idea de que el Islam puede ser una fórmula de gobierno, ley y revolución” (TE 2-2). El semanario británico *The Economist* se refería así al triunfo del 25 de enero de la lista que impulsaba a los candidatos de Hamas en las elecciones legislativas palestinas.

Hamas (siglas de las palabras en árabe, que se traducen como “Movimiento para la resistencia islámica”) es una organización político-militar formada al calor de la primera intifada (1987). Recientemente fue incluida en el listado de “organizaciones terroristas” por los EE.UU., Israel y la UE. Durante casi dos décadas, Hamas concentró sus acciones en la resistencia armada a la ocupación militar israelí —incluidos blancos civiles— y sólo recientemente decidió competir por cargos electivos, obteniendo triunfos en las elecciones municipales en los distritos de Gaza, Qalqilya y Nablus. Las indignadas protestas estadounidenses, israelíes y europeas por la admisión de Hamas en el campaña electoral se transformaron en estupor —seguido por una escalada de presiones— cuando sus candidatos, a los que los sondeos previos adjudicaban un tercio de los sufragios, obtuvieron una resonante victoria con el 56% de los votos. Los resultados marcan la crisis del gobernante Al-Fatah, brazo político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que por tres décadas dominó indiscutiblemente la vida política palestina. El mismo día del escrutinio, el gabinete en pleno se vio obligado a renunciar.

A los efectos prácticos, la victoria de Hamas, e incluso las mismas elecciones legislativas, difícilmente puedan cambiar las condiciones de vida de su población. No se puede llamar “estado” a los territorios gestionados por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) sin cometer una grave exageración. Se trata más bien de enclaves rodeados por colonias e instalaciones militares israelíes. La ANP no controla las rutas, ni el espacio aéreo, ni los recursos provenientes de su comercio exterior, ni posee fuerza militar alguna, si se exceptúa su sobredimensionado aparato de seguridad que, por exigencias israelíes, está abocado básicamente a perse-

guir a sus propios compatriotas. Se debe señalar, por otra parte, que no pudieron ejercer su derecho al voto los cuatro millones de palestinos refugiados en otros países ni el millón que poseen ciudadanía israelí.

Sumemos a esto el limitado poder que ejerce el Consejo Legislativo Palestino (CLP). Las negociaciones con Israel, el control de las fuerzas de seguridad y el nombramiento de jueces están fuera de su jurisdicción; son prerrogativas del presidente, cargo que desempeña desde 2005 Abu Mazen, líder de Al-Fatah. El CLP debe nombrar al primer ministro y formar gabinete, pero el presidente tiene el poder de cesar a ambos. Esto resultaba más fácil de hacer con un parlamento ampliamente dominado por Al-Fatah y cuyos representantes habían sido votados en 1996 (las elecciones de 2000 se suspendieron “por razones de seguridad”). La clara victoria de Hamas probablemente hará difícil el uso de esta opción a Abu Mazen.

Estas especiales características del “estado” palestino son cuidadosamente explotadas por los israelíes y sus aliados para neutralizar la decisión de la mayoría del pueblo palestino mediante su “estrangulamiento” económico. La ANP, en tanto no controla el comercio exterior, no puede mantenerse sin las donaciones aportadas por 34 naciones y agencias internacionales, y depende de la transferencia mensual de fondos por el cobro de impuestos aduaneros e IVA que cobra —a su cuenta— Israel. Sólo el pago de los sueldos de sus empleados estatales requiere de 116 millones de dólares mensuales. Según el Banco Mundial, la ANP registraba, en diciembre de 2005, un déficit de 800 millones de dólares.

En los días que siguieron al triunfo de Hamas, se reiteraron las amenazas por parte de la UE y los EE.UU. de cortar los fondos si el grupo islámico no aceptaba reconocer la legitimidad del Estado de Israel —reconocimiento que Al-Fatah llevó a cabo a principios de los ’90. En el caso de Israel, abiertamente reclamaba que el presidente Mazen no pidiera a Hamas la formación de un nuevo gabinete, lo que técnicamente equivalía a anular las elecciones.

A la apertura del nuevo parlamento (19 de enero) y el pedido de formación de nuevo gabinete por parte de Mazen, siguió el anuncio israelí de la ruptura de con la ANP —a la que considera, a partir de ahora, “agrupación terrorista”—, el cierre de fronteras a los trabajadores palestinos y la interrupción de las transferencias por impuestos. El mismo día, el director del servicio secreto israelí presentaba un informe apocalíptico a su parlamento: “*La gravedad de la situación radica en que todos los sectores radicales del Islam, desde los de Irán y la Jihad mundial hasta Al Qaeda, llegarán a los territorios palestinos para combatir a Israel*” (C 21/2). Mientras tanto, los EE.UU. pedían a la ANP la devolución de los 50 millones prestados para inversión en infraestructura vial. La interrupción de estos fondos obligó al presidente Mazen a iniciar una gira para conseguir ayudas adicionales por los países árabes.

Finalmente, la Liga Árabe y la UE aceptaron conceder estos fondos.

Aunque la opción de los votantes palestinos enfrenta serias limitaciones materiales para realizarse en términos de política práctica, tiene, en cambio, una gran importancia simbólica. No sólo es un síntoma del avance del islamismo en el escenario musulmán sino que evidencia el enorme fracaso de los EE.UU. e Israel, en sus intentos de imponer —con la anuencia de la UE— su política de “hechos consumados” al pueblo palestino. En otras palabras, se trata de la impotencia de las fracciones del capital más concentrado a nivel mundial para disciplinar, mediante el recurso de la fuerza física, a las fracciones “díscolas” de los espacios subordinados. Hamas representa, en el marco de las opciones políticas palestinas, la expresión popular del rechazo al “Proceso de Oslo” (1993-2000) y a la “Hoja de ruta” (2002). Éstos proponían, para la normalización del conflicto palestino-israelí, la cesión unilateral por parte de Israel de fragmentos de los territorios ocupados, para ser administrados por una inoperante ANP. A cambio, se exigía el reconocimiento del Estado de Israel y la desarticulación, por parte de la ANP, de toda organización política que se resistiera a validar la ocupación.

Según la plataforma con la cual Hamas ganó las elecciones, toda negociación con Israel debe ser precedida por la devolución de los territorios ocupados en la guerra de 1967, el abandono de los asentamientos cercanos a Jerusalén y el regreso de todos los refugiados y presos políticos palestinos en cárceles israelíes. Para Henry Kissinger —un clásico representante del llamado lobby israelí— estas condiciones “*serían para Israel un golpe psicológico que pondría en peligro su supervivencia*” (C 19/2).

Irán o el regreso de la crisis de los misiles

El comienzo del año también estuvo marcado por una escalada en las presiones y las amenazas cruzadas en torno al polémico plan nuclear iraní. Recordemos que este conflicto se remonta a fines de 2002, cuando —en el marco de los preparativos de la invasión a Irak— los EE.UU. dieron a conocer fotografías aéreas que revelaban la existencia de instalaciones nucleares en Arak y Natanz. Al año siguiente, y luego de una inspección aceptada por el gobierno iraní, la Asociación Internacional de Energía Atómica (AIEA) —una agencia de la ONU— reportaba que Irán había ocultado por 18 años un programa de enriquecimiento de uranio.

El enriquecimiento de uranio 238 —su transformación en uranio 235, apto para los procesos de fisión— es un paso técnico necesario para transformarlo en materia prima de los procesos nucleares. El uranio 238, que se haya disponible en yacimientos naturales, cuenta con sólo 1% de isótopos de uranio 235. Para ser usado en la generación de electricidad, debe ser enriquecido al 3-4%. Para fabricar una bomba nuclear, el enriquecimiento debe ser del 90-95%.

El temor, invocado por las potencias del “bloque occidental”, de que Irán desarrollase un programa de armas nucleares, motivó una nueva serie de inspecciones

por parte de la AIEA y una ronda de negociaciones entre Irán y la llamada “tríada” europea (Gran Bretaña, Francia y Alemania). Pero la negociación sufrió un duro revés cuando, en agosto de 2005, Irán rechazó las proposiciones de la “tríada” y desembocó en una crisis diplomática cuando, en enero de este año, el gobierno de Teherán decidió romper los sellos colocados por la AIEA en varias de sus instalaciones y retomar su plan nuclear; crisis agravada con el montaje, en febrero, de 10 nuevas plantas centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio.

Por primera vez, las cinco “potencias” nucleares (EE.UU., Francia, Gran Bretaña, China y Rusia) coincidieron (el 31 de enero) en encarar una acción punitiva, presentando ante la AIEA un dictamen para someter el caso al Consejo de Seguridad de la ONU. Esto abre un marco jurídico para la ejecución de acciones militares punitivas contra Irán en el marco de la ONU, aunque — como comentaremos luego— esta interpretación se halla lejos de lo deseable para los socios comerciales de Irán dentro del “quinteto nuclear” (Francia, Rusia y China). A fines de febrero, pareció factible un acuerdo de base entre Rusia e Irán para que esta última nación enriquezca su uranio en territorio ruso, lo que generó cierta distensión del conflicto.

Hay que señalar que —bajo los términos del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1979— toda nación tiene el derecho de producir combustible nuclear para usos civiles, bajo inspección de la AIEA. En esto se ampara el régimen de Teherán, al que la AIEA le exige pruebas de que no está desarrollando su programa con fines militares —lo que equivale a invertir el principio jurídico según el cual “todo sujeto es inocente hasta que se demuestre su culpa”.

Por otra parte, es perfectamente posible que Irán intente desarrollar armamento nuclear: su ubicación geoestratégica explica que esta opción cuente con el apoyo de más del 70 % de la ciudadanía iraní (LF 12-2). “Irán está rodeado de potencias nucleares —India, Pakistán, China, Rusia, Israel y, por supuesto, Estados Unidos. Un líder iraní que no impulsara la fabricación de armas nucleares estaría loco” (Emmanuel Wallerstein, LJdeM, 5/7/2004).

Uno de los argumentos de Irán es que los EE.UU., en particular, muestran un trato no equitativo respecto de la aplicación del TNP. “No hay así dudas de que India e Israel poseen capacidad para fabricar armas nucleares. Pero ambas naciones mantienen relaciones cerradas de cooperación con los estadounidenses. Israel es un sólido socio militar, y si inicialmente la administración republicana albergó reservas respecto del programa nuclear indio, finalmente decidió aceptar que tiene como objetivo aplicaciones civiles. La India e Israel poseen, para Washington, diferente categoría diplomática que Irán. Ninguno de los dos —tampoco Pakistán— fueron presionados para que firmen el TNP” (BBC 13/1). Lo que resulta inaceptable a Washington es que la nación que se considera el referente del radicalismo islámico posea un programa de armas nucleares capaz de equilibrar las relaciones militares en la región. Esto alertaba Donald Rumsfeld, al afirmar

que “cualquier gobierno que dice que Israel no tiene derecho a existir está revelando su posible conducta en el futuro” (C 6/2). Las fechas que marcan la “crisis diplomática” coinciden, por otra parte, con el acceso a la presidencia de un proyecto político que intenta recrear la alianza entre el clero chiíta y el movimiento de masas anticolonial, como lo expresa el intelectual del neoconservadurismo estadounidense William Kristol: “La crisis de los misiles cubanos con Krushchev fue suficientemente peligrosa. ¿Nos arriesgaremos a algo semejante con Ahmadinejad gobernando Irán?” (LF 5/2).

El Islam y la experiencia colonial

Como ya hemos señalado, la propuesta de “regreso a las fuentes” de la religiosidad musulmana, es casi tan antigua como el Islam mismo. El Islam posee un especial potencial para formular las aspiraciones políticas en términos religiosos: la unidad política-religión forma parte de las tradiciones indiscutidas del Islam y tiene origen en el modelo de la *Umma*, desarrollado por Mahoma y sus discípulos, e incesantemente recreado por las distintas vertientes musulmanas. Mahoma, al ingresar en La Meca luego de su exilio en la Medina, no sólo fundó una religión, sino también un estado. Esta tradición contrasta con la cristiana, en la cual la religión —corporizada en los miembros de la jerarquía eclesiástica— se superimprimió sobre el funcionamiento de un estado no cristiano. Frecuentemente, el “islamismo” operaba como soporte ideológico de los clanes y grupos proto-nacionales que, en la periferia del imperio, se alzaban contra la autoridad central invocando una reformulación, o más bien una vuelta a los términos originales de la *Umma*; la que, naturalmente, cada uno de estos grupos reinterpretaba de acuerdo a sus intereses particulares.

El *chiísmo* —junto con la lengua persa o *pahalavi*— se constituyó desde los primeros tiempos de la dominación árabe en un poderoso aglutinante nacional para los clanes persas. Cuando en el siglo XVI la tribu turca de los *safévidas* unificó el país —enfrentando a los otomanos y a los uzbekos— rápidamente adoptó el chiísmo como religión de estado. Hay varias corrientes dentro del chiísmo, pero su aspecto más escatológico lo aporta el “ismalismo”, un movimiento de los oprimidos, cuyos principales seguidores fueron los campesinos y los artesanos de las ciudades.

Ya en la era moderna, y en paralelo con la persistencia del chiísmo, se desarrollarían otras formas de expresiones “nacionales” del Islam, como el *wahabismo* saudí (nombre derivado de Abd al-Wahab, el guerrero que realizó, en el siglo XVIII, la primera unificación política de la península arábiga). En tanto los conatos de independencia se realizaban a expensas del dominio otomano, y frecuentemente bajo la anuencia de las potencias coloniales europeas, este tipo de “islamismo” tendió más bien a fraccionar el escenario musulmán.

Luego de la desarticulación del Imperio Otomano, culminada a fines de la Primera Guerra, se hizo evidente la política de “divide y reinarás” por parte de las potencias imperialistas europeas. Gran Bretaña reprimió me-

diante la fuerza militar la “gran nación árabe” desde el Mar Rojo al Mediterráneo, que impulsaba su ex aliado Husain I, emir de La Meca. Francia, por su parte, ocupó Damasco con el fin de impedir la formación de un estado árabe que abarcara el actual territorio de Siria, Palestina y El Líbano. El traumatismo de la ruptura de la unidad política del mundo musulmán y la percepción de que dicha ruptura formaba parte de una estrategia imperialista sobre el conjunto del Islam, impulsaron la formación de una miríada de grupos islámicos que se proclamaban anti-imperialistas. Un ejemplo lo constituyen los “Hermanos Musulmanes”, grupo creado en Egipto en 1928, al que pertenecían los fundadores de Hamas, y que posee en la actualidad ramificaciones tanto en el espacio musulmán como entre los migrantes musulmanes en los países occidentales: la Asociación de Musulmanes Británicos —que llevó a cabo la campaña “Stop the War” frente a la invasión a Irak— y la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia constituyen dos ejemplos.

Debido a que los grupos islámicos tendieron a expresar su anti-imperialismo bajo la forma de un rechazo a la civilización occidental, durante el período de la “Guerra Fría” sus militantes generalmente constituyeron una fuerza de choque contra las agrupaciones del nacionalismo panárabe —que lideró la lucha anticolonial en estos años— y del marxismo. Por lo tanto, no fueron una fuente de preocupación para el gobierno estadounidense —que tomó el papel de relevo en la zona tras desplazar a los imperios británico y francés—, a pesar de que, por diferentes razones, los representantes del nacionalismo árabe y los del islamismo conservador coincidían en rechazar el enclave militar que constituía el Estado de Israel. El papel jugado por Al Qaeda —organización que ideológicamente bebe en las fuentes del *wahabismo*— durante la ocupación soviética en Afganistán (1979-1989) constituye el ejemplo más reciente del papel que el Pentágono reservaba a estos grupos. Para esos mismos años, la revolución iraní de 1979 alteró profundamente la situación: por primera vez, el islamismo apareció como una fuerza capaz de conducir el movimiento anti-imperialista de masas.

La revolución y la “economía islámica”

A despecho de las imágenes corrientes que nos aportaron los medios (grandes masas de mujeres con *burqa* o velo y vestimentas negras, reverenciando a su *ayatollah* en la plaza de Teherán), fue la enorme movilización obrera la que paralizó al régimen pro-norteamericano del *shah* y desencadenó la revolución iraní. Cuando el *ayatollah* Khomeini dejó, en febrero de 1979, su exilio en Francia y se puso a la cabeza del Partido Republicano Islámico (PRI), el gobierno del *shah* había sucumbido luego de un ciclo de movilizaciones iniciado en 1976 por los trabajadores de la industria textil. Este proceso tuvo su más alto pico a partir del 8 de septiembre de 1978, cuando, como respuesta al “viernes negro” en que el ejército asesinó a miles de manifestantes en Teherán, los trabajadores del petróleo, la construcción, la industria de maquinarias, el transporte, el comercio y la banca

se sumaron a la huelga general. Resulta lógico que, en un país con altísima renta petrolera, el golpe de muerte para el gobierno estuviera a cargo de los trabajadores del petróleo: las huelgas de más de un mes de duración en la refinería de Teherán y en los pozos de extracción del Khuzistán costaron al régimen del *shah* la pérdida de 2.500 millones de dólares.

En la década del '60 y comienzos de la del '70, el aumento de la renta petrolera había permitido al gobierno impulsar ambiciosos planes quinquenales de “modernización”. Una reforma agraria que introdujo la economía de mercado en el medio rural operó como un liberador de mano de obra del campo a las ciudades. A la par, se desarrollaba una industrialización de “enclaves”, alentada por la inversión extranjera (el 50% estadounidense) y la inversión pública. Cuando el *shah* decidió, en 1976, recortar los programas de inversión, el resultado fue el alza de la desocupación, la baja de los salarios hasta en un 40%, sumado al incremento del costo de la vivienda y los alimentos en las ciudades.

A las demandas obreras se sumaban las de la burguesía local, afectada por un veloz proceso de transnacionalización de la economía y centralización de la propiedad. Esto tendría como resultado que, en 1974, cuarenta y cinco familias controlaran el 85% de las principales empresas. La insatisfacción de los *baazaríes* (la burguesía comercial local) se puso en evidencia cuando se sumaron a la paralización del comercio y los servicios.

El bien estructurado clero *chiíta* —que goza en Irán de un ascendiente prácticamente desconocido en el resto del mundo árabe— tenía motivaciones específicas para liderar la insurrección. Una fuente de conflicto fueron los programas de modernización de la “revolución blanca”, que constituían la cara amable del régimen frente al mundo —la *Savak*, o policía secreta, eran su lado vergonzante— y que incluían la enseñanza laica. Pero fue en 1963, con la reforma agraria, cuando la oposición al *shah* por parte de los *mullahs* (clérigos) se evidenció más claramente: la mercantilización de las relaciones de producción agrarias los enajenaba de las *vajjs* (dotes agrarias) que constituían su principal fuente de ingresos.

Con el apoyo de los campesinos expropiados que no encontraban trabajo en las ciudades, o sufrían pésimas condiciones de vida, y la anuencia de comerciantes e industriales interesados en la nacionalización del crédito y los recursos petroleros, los *mullahs* pudieron explotar la peculiaridad religiosa *chiíta* como un aglutinante de los intereses nacionales frente al laicismo, representado por un régimen represivo y sumiso a los intereses imperialistas. Esta sumisión se había manifestado en dos aspectos. Por un lado, hacia los intereses de las grandes corporaciones petroleras estadounidenses: la burguesía local no olvidaba el derrocamiento, con activa participación de la C.I.A., del gobierno nacionalista de Mossadegh (1953), que había intentado nacionalizar los recursos petroleros. Por el otro, el sometimiento a los intereses estratégicos estadounidenses, en un grado difi-

cil de aceptar: el reconocimiento del Estado de Israel le costó a Irán el ostracismo en el mundo musulmán.

Las directrices del futuro gobierno revolucionario serían el rechazo visceral del “Occidente” representado por los EE.UU. y el establecimiento de una “economía islámica”.

El 7 de julio de 1979, el Consejo Revolucionario nacionalizó la Banca y abolió el interés. Veintiocho bancos (trece extranjeros y quince nacionales) pasaron a formar parte del sector público. Esta medida marcó el posterior desarrollo de la vida económica del país y limitó en gran medida las inversiones de capital extranjero. También se nacionalizaron las empresas petroleras, incluidas las refinerías de Teherán, Tabriz, Shiraz e Isfahan, lo que implicaba quedarse con la parte del león de la renta petrolera. Los costos de los productos de alimentación básicos y la energía se subvencionaron, a la vez que se realizaban importantes inversiones en salud y educación. La mortalidad infantil pasó del 104‰ en la mitad de los años '70 al 25‰ en los '90. La esperanza de vida en el mismo período pasó de 55 a 68 años. Se establecieron subsidios para los productos básicos y la energía y los impuestos a los ricos aumentaron; se aprobaron leyes laborales y también subsidios para el desempleo y la seguridad social. El porcentaje de los gastos totales públicos dedicados a la sanidad y al estado del bienestar pasó del 6,1% en 1972 al 18,4% en 1990. También se realizaron inversiones para el desarrollo industrial, especialmente en la industria del metal, que con 155.000 trabajadores constituye hoy la principal rama empleadora, aunque la industrialización conserva aún su aspecto de “archipiélago de enclaves”: el 65% de los trabajadores industriales trabajan en grandes plantas. La pérdida de poder político de la clase obrera —que fue, sin embargo, el motor de la revolución— fue consecuencia no sólo de la represión ejercida sobre sus cuadros —la mayoría agrupados en el Partido Comunista Iraní o *Tudeh*— sino también de la situación objetiva del proletariado iraní. Aún hoy, el sector servicios emplea a la mayor parte de la población y el 22 % trabaja en la agricultura.

La guerra con Irak (1980-1988) no sólo profundizó el distanciamiento con los EE.UU., iniciado con el asalto a la embajada estadounidense en Teherán (1979) —el gobierno de Carter impulsó a la guerra a un aliado, para peor, representante del nacionalismo laico— sino que consolidó la tendencia a la centralización estatal.

En la “economía islámica”, el gobierno controla el petróleo, la banca, los seguros, la energía, la mayoría de las grandes industrias y el comercio exterior. Pero, ¿quién controla el gobierno? Fundamentalmente, el clero *chiíta* a través de las grandes fundaciones caritativas (*bonyads*), en las que se agruparon las propiedades y empresas expropiadas al *shah* y a su familia. Los *bonyads*, exentos de impuestos y cuyas propiedades se extendieron hasta representar el 40% del PBI iraní, aseguran la reproducción material de los *mullabs* y sus aliados, sean éstos fracciones de la burguesía —mediante créditos “blandos”— o del proletariado —mediante fondos para la

vienda, la mejora de los sistemas de irrigación y la asistencia pública.

En *Análisis...* N°61, nos ocupamos de describir el peculiar sistema político iraní, en el cual los cargos electivos (la presidencia y la asamblea) están sometidos al poder de veto ejercido por el Consejo de Guardianes, una suerte de cámara alta no electiva compuesta por *mullabs* y juristas influyentes; es decir, constituye una suerte de combinación de Senado y Corte Suprema que vela por el cumplimiento, en última instancia, de la *sharia* (ley islámica). Por supuesto, entre sus deberes está el de asegurar el funcionamiento de una “economía islámica” —lo que, en definitiva, significa asegurar las fuentes de poder económico del clero *chiíta* y sus cuadros civiles en el estado.

Todo intento de reforma que comprometa esta forma particular de acumulación genera la reacción del Consejo de Guardianes. Esto se evidenció durante el período “reformista” del anterior presidente Khatami, quien promovió la privatización de las industrias estatales y el recorte de los fondos para la asistencia pública. Las reformas fueron consideradas hasta cierto punto una necesidad objetiva debido a que la base del sistema es la redistribución de la renta petrolera. La caída del precio del crudo en los '90 llevó a Irán a una deuda externa de 30.000 millones de dólares, 8.000 sólo en servicios. Las medidas de “saneamiento” afectaron los ingresos y provocaron un nuevo ciclo de conflictos obreros. A su vez, el recorte de las importaciones, con el fin de destinar una parte mayor de los ingresos por exportaciones al pago de la deuda, perjudicó a la burguesía local, al elevar el precio de los insumos: la industria iraní es claramente de sustitución de importaciones de bienes de consumo.

Resulta significativo que el regreso del populismo de corte islámico coincidiera con una fuerte recuperación de los precios del petróleo. “*Los mullabs nadan en un mar de ingresos del petróleo: se calcula que unos 36.000 millones de dólares el año pasado. Es un dinero que puede emplearse para comprar la insatisfacción material en casa*” (LM 3/2). Con el nuevo presidente Ahmadinejad, se retomaron las políticas de expansión monetaria y alto volumen de importaciones; el consumo estatal, que aumenta tendencialmente un punto cada año desde 2000, supera ahora el 20% del PBI. La guerra de Irak no sólo ha elevado los beneficios de las corporaciones petroleras; también ha dado impulso a la “economía islámica”.

Islamismos

Examinando la experiencia iraní, podemos formular, al menos como aproximación al fenómeno, una serie de características generales de los movimientos islámicos:

- Proponen estados cuyas instituciones básicas se ajusten a las concepciones económico-sociales del Corán (“economía islámica”, prohibición de la usura) y a la ley coránica (*sharia*).
- Toman al Islam como referente colectivo frente al avance del imperialismo capitalista-occidental.
- Se apoyan en movimientos de masas y en fracciones de las burguesías nacionales.

No obstante, la matriz ideológica no define las acciones de estos movimientos. Sus opciones se determinan en virtud de las necesidades de la lucha anticolonial en sentido amplio —es decir, con referencia a todo el mundo musulmán— y de la configuración de las alianzas en la lucha por la liberación nacional. *“Las dos formas mejor conocidas de islamismo (los Hermanos Musulmanes y Al Qaeda) tienen orígenes ideológicos comunes. Ambos se enraízan en la oposición antiseccular en Egipto, en una lectura conservadora sunnita del Islam y en el celo religioso saudí. Pero difieren profundamente en cuanto a políticas y tácticas (...) En enero, un sitio web con base en Londres, que refleja los puntos de vista de la Jibad, presentó el punto de vista de 102 clérigos islámicos para demostrar por qué los buenos musulmanes no deben participar en elecciones”*. El comentario hace clara referencia a Hamas: la Jihad islámica, otro grupo armado palestino que cuenta con financiamiento iraní, se negó a presentar candidatos a elecciones. Continúa la nota: *“Son muchos los musulmanes que no se alegran de la victoria de Hamas, especialmente Al Qaeda y sus simpatizantes. Ellos están furiosos por el compromiso de Hamas con las ideas seculares al participar en elecciones multipartidarias”* (TE 2/2).

A pesar de su adscripción al *sumismo*, Hamas cuenta con el abierto apoyo del gobierno iraní, que ofreció fondos para sostener la ANP y recibió con honores a su líder espiritual, Jaled Mashal, días después de las elecciones. Hamas comparte con el *ayatollah* Kamenei el desprecio por las tácticas de Al Qaeda, en tanto sus líderes sólo aceptan la violencia contra civiles *“en circunstancias de ocupación como las que existen en Israel, Cisjordania e Irak”* (TE 2/2). Por otra parte, el triunfo de Hamas no es atribuible exclusivamente a su política de resistencia frente a la ocupación israelí, sino también a los programas sociales y a la edificación de hospitales y escuelas que llevó a cabo en los municipios que controla, a su política de asistencia a los refugiados, viudas y huérfanos, y a sus denuncias de corrupción de los miembros de la ANP —el director del Tesoro se encuentra prófugo— que le valieron un sorprendente triunfo, a fines de 2005, en el distrito de Nablús, habitada por *“gunders familias burguesas que antes presionaban por el fin de la intifada y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa y los EE.UU.”* (LF 30/1).

La amenaza y las alianzas

La emergencia del islamismo parece provocar un efecto cohesivo sobre el mutante sistema de alianzas, corporizado en estados que responden, por su parte, a la configuración de las fracciones de clase en sus respectivos espacios. En el caso de Irán, la aparente subordinación de la “tríada” europea, y más sorprendentemente de China y Rusia, al objetivo estadounidense de llevar el conflicto al Consejo de Seguridad de la ONU parece indicar que las necesidades estratégicas del capital global se imponen a las necesidades particulares de sus fracciones. Aunque, en el caso de China, lo que condicionó la decisión fue, aparentemente, la necesidad de optar entre dos socios comerciales de desigual peso. Así lo expresó Chris Patten, ex Comisario de Comercio de la

UE: *“Si China tiene que elegir entre irritar a un Congreso estadounidense con ánimo proteccionista e irritar a Irán, a regañadientes decidirá que el menor de los costos será irritar a Irán”* (C 6/2). China es un fuerte importador de petróleo iraní y tiene con Irán un contrato para la provisión de gas por 30 años.

Las amenazas de una posible intervención militar se reactivaron en la primera semana de febrero. *“Una guerra es mala, pero un Irán con armas nucleares puede ser peor”* (TE 19/1), alertaba John McCain, senador republicano. No obstante, el panorama no parece despejado para los planes punitivos con que amenaza la facción de los halcones norteamericanos. China, Rusia y, más ambiguamente, Francia, se pronunciaron en contra de eventuales sanciones militares por parte del Consejo de Seguridad. Los países centrales de Europa tienen mucho que perder aún, con un eventual embargo económico a Irán: el corte de relaciones comerciales con los EE.UU. colocó a Alemania, Francia e Italia como segundo, tercero y cuarto socio comercial, respectivamente, de Irán. Alemania (12,7% de las importaciones iraníes) e Italia (6,9%) la proveen de maquinaria; Francia (7,3%), de autopartes. Rusia, por su parte, le exporta uranio y se encuentra construyendo una central nuclear en la localidad iraní de Bushehr, además de haber suscrito contratos mixtos con el gobierno de Irán para la explotación de los recursos petroleros del Mar Caspio.

Resta mencionar que la aprobación del dictamen de la AIEA, que aconseja remitir el caso al Consejo de Seguridad, sólo se logró cuando los EE.UU. aceptaron la inclusión de una cláusula, impulsada por los miembros de los países no alineados, en la que se recomienda *“la desnuclearización de Medio Oriente”*. Es obvia la referencia a Israel; la aceptación estadounidense significó una desagradable concesión.

En el caso de Hamas, ni siquiera existe unanimidad entre los miembros del “cuarteto”. Los EE.UU. suscribieron la postura israelí de incrementar las presiones mediante el retiro de fondos. La postura de la UE es algo más flexible: se reclama a Hamas el reconocimiento del Estado de Israel pero no se aplica —de momento— el estrangulamiento económico. El presidente ruso, en cambio, y para escándalo de Israel y los EE.UU., invitó a integrantes del grupo Hamas a dialogar con él en Moscú, en lo que se interpreta como un intento de recobrar la influencia de la antigua URSS en Medio Oriente: *“Putin felicitó a Hamas luego de las elecciones, precisó que, para él, no constituye una organización terrorista y opinó que la idea, sugerida por Washington y Bruselas, de recortar los fondos a la ANP, constituiría un grave error”* (LF 11/2). En una muestra más de desconexión, París se mostró sugestivamente favorable a la iniciativa rusa, mientras Washington demandaba a Putin que definiera sus *“intenciones exactas”* (LF 12/1).

América Latina

Haciendo caso omiso a las políticas que el propio Banco Mundial (BM) impulsó e introdujo en América Latina, a partir del retiro del Estado en los años '80 y '90 en toda la región, el nuevo informe de este organismo afirma la necesidad de contar con un Estado que aliente y promueva políticas activas en la promoción social, así como la creación de "mecanismos compensatorios" necesarios para paliar las desigualdades ocurridas en los últimos 20 años.

Este nuevo informe, si bien reconoce el fracaso de las políticas anteriores, introduce algo más que "llamativo" como cínico. Esto es que los pobres (y la pobreza) son las causas del freno y fracaso al desarrollo. El jefe del BM para la región, Guillermo Perry, afirmó: "*Es la propia pobreza la que impide alcanzar tasas de crecimiento altas y sostenidas en América Latina, región que continúa siendo una de las más desiguales del mundo y donde casi la cuarta parte de la población vive con menos de dos dólares al día*" (LN 15/2). La vicepresidenta del BM para la región siguió en la misma dirección: "*La pobreza está entorpeciendo el crecimiento de la*

región y, a menos que se aborden las limitaciones que afectan a los pobres, seguirá siendo difícil lograr un crecimiento vigoroso" (LN 15/2).

Mientras el BM daba estas cifras se estaba produciendo el conteo de votos en Haití y Costa Rica para elegir nuevo presidente. El primero es el más pobre del continente y vive una crisis política endémica desde su independencia hace ya más de 200 años. El segundo, que fue caracterizado como un "país europeo" en América Central, está sufriendo una crisis de participación por parte del electorado y un derrumbamiento del bipartidismo que caracterizó los últimos 50 años.

Por su parte, EE.UU. sigue adaptándose a la nueva situación de la región, tras los triunfos de gobiernos que parecen intentar un nuevo camino alejados de la estela de Washington. Las nuevas teorías que bajan de los ideólogos del departamento de estado norteamericano son un aviso para los actuales presidentes y también los futuros, como es el caso de Perú y el ascenso de Ollanta Humala.

Situación Política

Elecciones en Haití: entre la "esperanza" y la dura realidad

Finalmente, y luego de cuatro suspensiones, se realizaron las elecciones para elegir presidente en Haití el 7 de febrero pasado, con un saldo de cuatro muertos, menos de lo que preveía la ONU. Este pequeño país, el más pobre de América Latina, cobró trascendencia desde febrero de 2004 producto del derrocamiento de su presidente Jean Bertrand Aristide y por la intervención de las Naciones Unidas, cuya fuerza militar está comandada por Brasil. Veamos cómo se llega a esta situación.

Los sucesos de los últimos años.

En los *Análisis...* de Febrero y Abril de 2004 (véase *Análisis...* n° 45 y 46) habíamos analizado las causas de la caída de Aristide, hasta ese momento el hombre fuerte de este pequeño y golpeado país que, junto a Bolivia, es uno de los más sufridos en lo que respecta a la situación de sus habitantes (sólo 110.000 personas poseen empleo sobre los 8,5 millones de personas, lo que repercute en el índice de pobreza que trepa al 80%, siendo casi del 30% el índice de desnutrición) y también en lo que atiene a la estabilidad política.

Para presentar brevemente la historia reciente de este país, diremos que sólo un presidente pudo concluir su mandato en más de 200 años de historia (Rene Préval entre 1996 y 2001), y que sufrió una de las peores dictaduras del continente, la de François Duvalier ("Papa

Doc", 1957-1971) y Jean Claude Duvalier ("Baby Doc" 1971-1986)

Luego de la caída del clan Duvalier, y tras varios golpes de estado, asumió la presidencia en 1990, Jean Bertrand Aristide, proveniente de la rama católica de los salesianos y defensor de la "Teología de la Liberación". Su gobierno duró aproximadamente 8 meses siendo depuesto por Raoul Cedras. Refugiado en EE.UU. retomó el poder gracias a la intervención de más de 20.000 marines que lo llevaron nuevamente a la presidencia. En el 2000 fue reelecto luego del gobierno de René Préval (1995-2000), aunque esas elecciones fueron denunciadas por fraudulentas.

Tras cuatro años de gobierno, a la presión de una minoría excluyente y aristocrática blanca, que retiene las verdaderas riendas del poder, se sumó el alejamiento de Aristide respecto de las principales potencias – sobre todo de Francia y EE.UU.. Así, Aristide intentó llevar adelante un mayor acercamiento a Cuba en el plano internacional, una avanzada contra las privatizaciones y la duplicación del salario mínimo. Con esto enfrentaba al mismo tiempo a los industriales del país, los grupos locales, los organismos internacionales y las principales potencias que le quitaban el apoyo.

La intervención en la madrugada de tropas norteamericanas en el palacio presidencial en febrero de 2004 instigando a Aristide a renunciar tras la excusa de un "levantamiento popular", que no era otra cosa que la proliferación de bandas armadas (algunas de las cuáles

habían sido creadas por el propio Aristide), fue el intento de encubrir ante el mundo lo que la mayoría de los diarios hoy reconoce: un golpe de Estado. Por ese entonces planteábamos el interrogante abierto sobre la situación política ya que Aristide seguía teniendo el apoyo de los sectores populares.

Una vez iniciado el proceso posterior a la caída de Aristide, fuerzas de la ONU, a través de la MINUSTAH (Misión de Estabilización de la Naciones Unidas en Haití que reemplazaron a los marines norteamericanos), comandadas por Brasil y con la participación de Argentina, Chile, Canadá, Uruguay, entre otros países, tenían como objetivo sostener al gobierno de transición comandado por el primer ministro interino Gérard Latortue y el presidente provisional Boniface Alexandre. Pero dada la delicada situación y la intransigencia de la aristocracia blanca (menos del 5% de la población) ante la posibilidad del retorno de los aliados de Aristide al poder se fueron postergando las elecciones hasta febrero de este año.

Estas elecciones se debieron llevar adelante de manera urgente ya que la situación de las tropas de la ONU se hacía cada vez más delicada. Según Juan Gabriel Valdez (representante especial de Naciones Unidas para Haití): *“La ausencia de una elección haría más difícil controlar la inestabilidad y la acción de grupos que buscan el fracaso del proceso”* (C 17/1). Según el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Insulza: *“un gobierno legítimo es la única forma de abordar esta dramática situación en la que un habitante haitiano vive con la mitad que hace 20 años”* (C 17/1). El propio editorial de clarín del día 19/1 alertaba sobre el fracaso del proceso electoral en Haití: *“se insta a que la misión no aborte, ya que puede ser un mal ejemplo para la región”*.

Las elecciones: fraude, muerte y triunfo de Préval

Para las elecciones (en las que también se elegían 30 senadores y 100 diputados), entre los que se presentaron 34 candidatos, sobresalían la postulación del ex presidente Rene Préval (por el partido Lepsua – “Esperanza”), Leslie Manigat (por la Agrupación por los Demócratas Nacionales Progresistas –RDNP- y también ex presidente en 1988), la candidatura de Charles Baker (un industrial), y la de Guy Phillippe que fue uno de los impulsores de la revuelta en contra de Aristide, pero que rápidamente se quedaba sin chances.

Tanto Manigat como Baker tenían el apoyo de la aristocracia blanca, siendo el primero el favorito. Gracias al apoyo de las “184 organizaciones” empresariales y sociales (que también fueron parte del golpe de estado de febrero de 2004), y con vínculos con la Central

de Inteligencia Norteamericana (CIA), Manigat intentaba detener el avance de Préval.

Por su parte, este último, mano derecha durante los dos gobiernos de Aristide (“hermano gemelo” tal como éste último le decía), se hizo fuerte en los barrios populares, que lo vieron como un puente para el regreso del ex presidente y como el único que podía canalizar sus demandas: *“Los niños deben de salir de las calles. Las armas deben de ser retiradas de las manos de los niños y ser reemplazadas por lápices y libros”* y para agregar: *“Los ricos están enclaustrados en sus chalets amurallados y los pobres son arrojados a barrios bajos y no poseen nada. La brecha es demasiado grande”*, advirtió Préval en su campaña y cuando se realizaba el conteo final de los votos (El Nacional, Rep. Domin. 16/2).

De esta forma, los primeros sondeos daban una amplia diferencia a favor de Préval, pero las urnas demostraron que esta brecha se podría agrandar a un nivel en el cual el candidato por la Lepsua (“Esperanza”) no tendría problemas para vencer en primera vuelta. El intento de desprestigiar la figura de Préval, así como sus vínculos con Aristide, se hacían añicos, por lo que se intentó dilatar el resultado final.

A partir de allí se empezó a hostigar a los haitianos para que no salgan a apoyar a Préval. La jefa del Departamento de Estado Condoleezza Rice pidió respeto *“por los resultados finales cuando se anuncien”* (LN 10/2) y Sean McCormack (vocero del Departamento de Estado de EE.UU.) sentenció: *“Creemos que el gobierno haitiano debería mirar al futuro, no al pasado”*, para agregar que: *“Aristide está en Sudáfrica y esperaría que se quedara allí”* (LN 11/2).

Tras el lento proceso de conteo, se sumaron los dichos de algunos miembros del Centro Electoral provisorio (CEP), como los de Pierre Richard Duchemin al afirmar que estas *“elecciones están siendo manipuladas”* (EN –Rep. Dom. y C 13/2). Un día después, dos de los nueve miembros de la CEP afirmaban que los resultados estaban siendo manipulados (EN –Rep. Dom. y LN 14/2). Según Guy Alexandre, asesor del primer ministro: *“Si las circunstancias lo presionan, Préval irá en la dirección de la negociación con otras fuerzas políticas”* (LN 14/2). En última instancia se trataba de que el presidente electo tuviera poco margen de maniobra ante el nuevo panorama político. El propio Préval ante esta situación afirmó: *“Tenemos la convicción de que el proceso electoral estuvo caracterizado por un fraude masivo, además de otros errores importantes”* (LN 15/2).

Tras descubrir centenares de urnas en un basural de los barrios donde Préval era favorito, más los desesperados intentos de Manigat por forzar una segunda vuelta, la intervención en las calles de los seguidores de

Préval (con el saldo de un muerto) fue crucial para que la OEA y la ONU aceleraran la decisión de dar por triunfador a Préval. Notemos que tanto el momento de la elección como el traslado de las urnas era responsabilidad de la MINUSTAH. El acuerdo se basó en repartir los votos en blanco de manera proporcional al porcentaje obtenidos en la elección, de esta manera el partido Lepswa que tenía casi el 49% de los votos (37% más de votos que su seguidor RDNP de Manigat con el casi 12%) alcanzó más del 51% y logró el triunfo en la primera vuelta.

Lo que dejó esta elección

Indudablemente Jean Bertrand Aristide es la persona que sigue reuniendo las condiciones que los sectores más pobres de Haití siguen esperando hoy en día. René Préval (ingeniero agrónomo y mano derecha de Aristide en sus dos gobiernos anteriores) logró capitalizar este apoyo a su favor.

Por su parte, el triunfo de Préval dejó en claro que lo ocurrido en febrero de 2004 fue un golpe de estado, apoyado por bandas armadas (otrotra base de Aristide que habían sido desplazadas), la minoría y excluyente aristocracia blanca, con el visto bueno de EE.UU. y Francia (de gran influencia por el pasado colonial de este pequeño país), sumado a los industriales y organizaciones sociales del establishment político.

El papel de la ONU quedó al descubierto por varias razones, ya que no logró conformar un gobierno de transición que pueda reunir las condiciones que reemplacen a la figura de Aristide y sus aliados, no logró una real pacificación y unidad (misión imposible debido a los altos índices de desempleo y pobreza) y a su vez permitió el reconocimiento mundial de Préval ante unas elecciones que no sólo fueron seguidas por gran parte de la prensa y las potencias mundiales sino que a su vez sorprendieron por su masividad (ya que votaron aproximadamente el 70% del padrón).

También quedaron demostradas las diferencias entre los países integrantes de la misión ante el papel que tenía que jugar el organismo ante estas elecciones. Brasil fue uno de los impulsores del acuerdo final, y tuvo que esforzarse para convencer a EE.UU. y Francia. Marco Aurelio García, el asesor de política exterior de Lula, fue uno de los que primero intentó resolver la delicada situación, afirmando que la diferencia de votos era “*expresiva*” y que había “*unanimidad en la comunidad internacional para llegar rápidamente a una solución de consenso que impida una nueva explosión popular*”, para afirmar que: “*lo ideal sería si los candidatos, aparte de reconocer su derrota, reconociesen claramente la victoria de Préval*” (LN 16/2). Cosa que el derrotado Manigat no hizo, ya que definió el

triunfo como un “*golpe de estado*” (C 16/2) y que “*la elección me la han robado*” (C 18/21).

En Haití se abre un nuevo ciclo. Sin la ayuda internacional la situación de este país se vería más comprometida de lo que ya está. Las tropas de la ONU se quedarán por 6 meses más por el momento (aunque retomando lo que dijo Marco Aurelio García “*los tiempos en Haití deben ser políticos no cronológicos*”). Préval declaró que no va a apoyar “una solución militar” para frenar la violencia que impera en los barrios pobres de Haití. Además subrayó que los 9.500 efectivos de la fuerza militar y policial que la ONU desplegó en el país tras la partida de Aristide debería retirarse lo más pronto posible, pero no antes de que las fuerzas haitianas puedan mantener la estabilidad (El nacional, Rep. Dom. 16/2). En medio de esta delicada situación, Condoleezza Rice afirmó que EE.UU. está pensando en reducir fondos para Centroamérica y el Caribe para el año 2007, debido a la redistribución de los fondos. Se pasaría de 254 millones de U\$S a 181 millones, por lo que Haití también vería reducido su caudal de ayuda.

Hoy en día, la situación de Haití no es más sólida que hace dos años atrás. Todo parece indicar que si Préval avanza en algunas reformas que vayan en contra de la minoría blanca el estado de tensión nuevamente volverá a instalarse y el enfrentamiento armado estará a la orden del día.

Elecciones en Costa Rica: entre la apatía y llamados de atención por el TLC

Finalmente y luego de varios días de incertidumbre se supo el resultado final de las elecciones de este país centroamericano, señalado en otros tiempos por su estabilidad económica y política.

Luego de un reñido y sorpresivo final se impuso en las elecciones el candidato por el Partido Liberación Nacional (PLN) Oscar Arias (premio Nobel de la Paz en 1987 por los acuerdos firmados para la pacificación en Centroamérica), por escasos 18.000 votos. El PLN (que obtuvo el 40,92% de los votos emitidos) aprovechó el desplome del partido gobernante (el histórico Partido Unidad Social Cristiana –PUSC–) que sólo alcanzó el 3,5% de los votos, logrando sólo 4 de los 57 escaños disputados para la cámara de diputados. Los casos de corrupción y el avance de reformas (sobre todo en el sector de telecomunicaciones) fueron la clave para barrer en este pequeño país el bipartidismo que lo había caracterizado (PLN Y PUSC).

Entre las diferentes entrevistas y programa de gobierno, el PLN de Arias apoya la firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y EE.UU.), ya que, según éste, un país como Costa Rica,

que “produce lo que no consume y consume lo que no produce”, depende del comercio. Objetan que EE.UU., junto con el TLC, no ofrezca cooperación. El PLN cree que es la única herramienta para crecer y crear 65.000 puestos de trabajo al año. Según Arias: *“No ha sido fácil porque hemos defendido temas que no son necesariamente populares, pero el liderazgo consiste precisamente en convertir algo impopular en algo popular”* (LN –Costa Rica 23/6).

Propone un programa masivo de educación y salud e irán por la reforma en el sector de telecomunicaciones (acusado de actuar de manera monopólica).

El avance final del otro partido que compite en esta elección (el Partido de Acción Ciudadana –PAC- creado en el año 2000 y que obtuvo el 39,80% de los votos emitidos) se debió a la cruzada anti-corrupción y a las críticas al CAFTA. Aunque su candidato Ottón Solís no está en desacuerdo con los tratados de Libre Comercio, el CAFTA se rechaza ante la desprotección en que quedarán las industrias locales de su país (azúcar y textil) y la eliminación de los derechos laborales de los trabajadores. Esta postura le bastó para que en menos de un mes reduzca en 20% la diferencia que Arias le llevaba. Según Solís: *“El modelo ha fracasado en mejorar casi todas las variables sociales importantes, y ahora estamos viendo una reacción en contra de eso en toda la región, y en Costa Rica”* (WSJ 7/2). El Estado según el PAC debe intervenir activamente en ocho áreas estratégicas para el desarrollo y la distribución justa de la riqueza: educación, salud, crédito, suministro de energía, telecomunicaciones, tecnología, cultura y deporte (propuesta de gobierno presentada en LN de Costa Rica por internet).

De esta forma las elecciones, que fueron la que registraron el mayor abstencionismo de la historia de este país (el 35%, superior al 31% de las elecciones de 2002) se dirimió entre la aceptación o no del ALCA. Sumado a la tendencia que viene ocurriendo en los países del continente Solís casi logra una victoria inesperada.

Perú: Frente a la realidad latinoamericana el decir y el hacer de los principales candidatos a la presidencia

Con los números arrojados por el último informe del Banco Mundial, si bien no nos sorprenden, podemos tomar dimensión del nivel de desigualdad en el que esta inmerso Latinoamérica. Según este organismo el 10% más rico de la población de la región percibe 48% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre sólo percibe 1,6%. Esta inequidad produce que 135 millones de personas (25% de la población total) vivan con menos de 2 dólares diarios, según estadísticas del Programa Mundial de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) (18/2 La República de Perú). Para salir de

esta situación el Banco aconseja, tal como anticipamos en la introducción, borrando con el codo lo que escribió con la “mano invisible” durante todos los 90’, *“transformar el Estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades y practique la redistribución eficaz”* (C 15/2).

Este retiro del Estado, sumado a la delegación en la resolución de los problemas, fue la acción reiterada de la gran mayoría del componente más sufrido de Latinoamérica desde los últimos 20 años a esta parte, producto de la derrota sufrida por los movimientos sociales y políticos en esas décadas. Sin embargo, en estos últimos años, vimos surgir movimientos críticos al modelo neoliberal, como resultado de las acciones conscientes de los diferentes sujetos latinoamericanos, que en algunos países lograron el control del gobierno del Estado (Venezuela y Bolivia son un ejemplo de esto) implementando políticas contrarias a la acumulación, en pocas manos, del capital.

Elecciones en Perú

Esta disputa parece instalarse en Perú, hasta ahora en el plano discursivo, pero que genera inquietud en los principales centros de poder. Reflejando la fragmentación del mosaico peruano, ya son 23 los candidatos a Presidente y varias las listas a congresales para la única Cámara Legislativa, luego del cierre de las anteriores por el ex presidente Alberto Fujimori. Todos estos candidatos presentan distintas visiones de cómo reproducir lo existente o de cómo modificarlo para el “bien del pueblo”, luego de las elecciones del 9 de Abril. Trataremos de analizar la oferta electoral en función de lo dicho y lo hecho por tres de estos candidatos.

Liderando las encuestas de intención de voto se encuentra la candidata de la alianza Unidad Nacional, cuyo principal exponente es el Partido Popular Cristiano (PPC), al cual pertenece Lourdes Flores. Parte de esta alianza representa a los intereses más concentrados de la economía peruana. Proclives a profundizar las privatizaciones y deseosos de terminar de implementar operativamente el reciente Tratado de Libre Comercio (TLC), acordado por la Administración de Toledo y los EE.UU. La participación de Flores hace cinco años en Venezuela en foros democristianos, que junto a otros espacios fueron elaborando el golpe de 2002, explica la categórica definición de Chávez: *“Ella es la candidata de la oligarquía de Perú”* (LR 11/1), lo que terminó generando un enfrentamiento entre el actual presidente Alejandro Toledo y el presidente venezolano.

Hijo de Etnocaceritas/Actual Nacionalista

Por el Partido Nacionalista Uniendo al Perú (el PNUP es la alianza entre el Partido Nacionalista del Perú – PNP- y Unión Por el Perú –UPP-) se presenta Ollanta

Humala¹. En el decir las acciones de gobierno de este candidato pasarían por los siguientes puntos: se plantea fundamentalmente un nuevo Modo de Crecimiento que se logrará descentralizando el aparato productivo para crear mercado interno. Esto se sustenta en la prioridad que recibirán los capitales nacionales, en la recuperación de las empresas privatizadas (los puertos cedidos a Chile encabezan la lista), y en la profunda revisión del TLC (que si es necesario será sometido a una consulta popular). El PNUP apunta a la democratización de la vida económica y social, que dé como resultado una sociedad de “*ciudadanos saludables, seguros y solidarios*”. La integración Latinoamericana, que reafirmaría la identidad nacional, es el objetivo que propugna este Partido, y la ejecutarán priorizando la relación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Comunidad Sudamericana de Naciones. De esta manera se explica la presencia de Ollanta en la visita que Evo Morales realizó a Venezuela (véase *Análisis... n° 68*) días antes de su asunción. “*Estamos convenidos de que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los movimientos sociales, las víctimas del neoliberalismo tienen su candidato, considero que en el Perú el compañero Ollanta es parte de ese movimiento, de esa rebelión.*” (LR 4/1), afirmó el entonces presidente electo Evo Morales. En el Palacio Miraflores el apoyo del Presidente de Bolivia sonó más que explícito y acompañó la palabras de Chávez, que lo identificó como un batallador del rescate de los recursos naturales y de la soberanía.

Justamente la recuperación de los recursos naturales es un punto central en el Plan de Gobierno del PNUP. Cambiando la constitución actual, propone nacionalización sin expropiación, lo que implica participación del Estado como propietario de acciones de las empresas que explotan distintos recursos.

Sin embargo, persisten varios problemas dentro del mismo PNP. El reclamo de las bases del partido, contra las viejas prácticas, se hizo oír cuando representantes de las 18 bases provinciales tomaron el local central exigiendo la reformulación de las listas a congresales, que entienden fueron elegidos “a dedo”.

Ollanta Humala también ha sido recientemente denunciado por una familia del poblado de Madre Mía, al Sur del Perú. La acusación sería por violación a los Derechos Humanos y abuso de autoridad cuando éste se desempeñó como jefe de la Base Contrasubversiva de

Madre Mía en 1992. Las denuncias las complementan campesinos que dicen haber sufrido abusos en lo que fue la represión contra Sendero Luminoso (guerrilla maoísta que actuó en los años '80 y '90 en el Perú). La versión de Humala de que la denuncia “está armada” es ratificada parcialmente por uno de los periodistas más serios del Perú, César Hildebrandt, que recientemente vio cómo le clausuraban su programa televisivo luego de darle una hora de aire a Humala. Para este conductor, crítico de la candidatura del PNUP, “*los empresarios se han unido a raíz del “susto” que representa Ollanta...*” “*y se están jugando por una candidatura*” (LR 6/2). Por este motivo el canal le secuestró las cintas que, elaboradas por su programa, probarían la tergiversada y maliciosa edición de imágenes, de los testimonios de Madre Mía, para acusar a Ollanta de violación de los derechos humanos.

Lo cierto es que Humala mide muy bien en las encuestas y va en ascenso, lo cual puede atribuirse a la creciente inclinación de la población peruana por los candidatos con discursos pragmáticos y antisistema, como Fujimori y Toledo.

El candidato que ya fue presidente

Alan García, presidente desde 1985 hasta 1990 por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), se ubica tercero en intención de votos. Autodenominándose “*representante de los intereses del pueblo*”, focaliza el cambio en la actitud de los administradores del Estado, que según él deberían reducirse los sueldos. Por otro lado, interpreta los fracasos de la democracia peruana y propone una solución: “*Si hubiéramos tenido un Presidente con energía que hubiese propuesto cinco temas al Congreso, y al no conseguirlo lo hubiera disuelto, estoy seguro de que el siguiente Congreso hubiese actuado*” (LR 22/1). Estos atisbos autoritarios quizás nos expliquen por qué el primer candidato a la vicepresidencia es Luis Giampietri, ex Almirante, acusado de probadas violaciones a los derechos humanos en la represión a Sendero Luminoso, en la presidencia de García. Aunque García estuvo exiliado durante los gobiernos de Fujimori (1990-2000), debería recordarse que éste ya llevó a cabo su propuesta. Mientras tanto, su segunda candidata a Vice, Lourdes Mendoza de Solar, no se avergüenza en afirmar que García tuvo un mal gobierno.

Al cierre de esta edición las encuestas de la empresa Apoyo, muy cuestionadas en sus métodos técnicos, daban a Lourdes Flores primera con el 27%, a Humala con el 20% y a García con el 13%. La consultora Datum otorga en el mismo orden un 34%, un 28% y un 18%. La segunda vuelta en el Perú funciona desde 1980, en 6 elecciones, solo Fujimori logró ser electo en primera vuelta.

¹ La familia Humala (todos militares retirados) tiene al menos dos alzamientos militares en su historial. El último reivindicando el Etnocacerismo (Véase *Análisis... n°55*), movimiento que propugna el gobierno de los indígenas en el Perú. Ollanta estaría fuera de este movimiento. Su padre afirma que no coincide con el PNP, pero ve al nacionalismo que impulsa como una instancia anterior al Etnocacerismo.

Las elecciones ya no son garantía de Democracia: sube la pelea entre Venezuela y EE.UU.

A principios del mes de febrero se produjo un nuevo roce entre estos dos países que vienen enfrentándose abiertamente desde el golpe de abril de 2002 cuando Chávez fue derrocado y EE.UU. apoyó al efímero gobierno del empresario Carmona, y más aún, cuando a partir del Referéndum revocatorio de 2004, que ratificó la presidencia de Chávez, éste declaró que la revolución Bolivariana entraba en una nueva etapa definida como Antiimperialista.

A las sucesivas acusaciones mutuas se le sumó por primera vez en la historia reciente de ambos países la expulsión de diplomáticos. En el caso de Venezuela fue expulsado un agregado militar norteamericano (el Capitán John Correa) acusado de espionaje y de incentivar el descontento entre las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) venezolanas: *“Advertimos al gobierno imperialista de Estados Unidos que si sus militares agregados continúan haciendo lo que este Capitán serán detenidos y puestos a la orden de la embajada para su expulsión, y el próximo paso sería retirar toda la misión militar (estadounidense)”*, para agregar: *“ellos están pensando que algún día habrá que hacer aquí una operación tipo Panamá. Vengan pues, aquí lo esperamos”* (LN 3/2).

Un día después llegó la respuesta de EE.UU. al expulsar de su país a la jefa de gabinete de la embajada venezolana, Jeny Figueredo Frías. Según el vocero del departamento de estado norteamericano, Sean McCormack: *“Ellos empezaron esto y nos hemos visto forzados a contestar”* (LN 4/2). Por su parte, Donald Rumsfeld (secretario de defensa de EE.UU.) redobló la apuesta y comparó a Chávez con Hitler al afirmar que ambos habían llegado a la legalidad de los votos y que luego habían desarrollado gobiernos autoritarios. Por su parte el jefe de la inteligencia norteamericana John Negroponte (que participó en los '80 de la lucha contra los movimientos sociales y políticos en Centroamérica) afirmó que Chávez está interviniendo en los asuntos internos de los países vecinos siendo, por ende, una amenaza para la región.

Pero lo que introdujo John Maisto, embajador norteamericano ante la OEA, es lo que permite visualizar

la redefinición de la estrategia norteamericana para América Latina. Si bien estos dichos ya habían empezado a difundirse en los últimos meses, a partir de estas últimas semanas empezó a tomar más fuerza ante el enfrentamiento con Venezuela y las sucesivas elecciones en los diferentes países de la región. Según Maisto: *“El vínculo entre democracia y desarrollo es el núcleo. No es suficiente tener elecciones. Es necesario tener una gestión de gobierno democrático, instituciones creíbles y democráticas, un gobierno que invierta en sus ciudadanos, en su educación y su salud, y que promueva adecuadas políticas para alentar su crecimiento”* (LN 19/2).

Estas declaraciones son clave por dos cuestiones.

En primer lugar evidencian el fracaso de la región por parte del sector más blando dentro de los “halcones” de la casa blanca, que estarían representados por Thomas Shanon (subsecretario para asuntos hemisféricos de América Latina) y el general Bantz Craddock (jefe del Comando Sur), ambos sostienen que la pobreza es la causa del avance de gobiernos “populistas” en Latinoamérica: *“el desafío que enfrentamos en la región no es Venezuela, es la pobreza, y la incapacidad de algunas sociedades para brindar los bienes y servicios que la gente necesita”* (C 4/2). Para ambos la forma de “contener” a Chávez a partir del aislamiento del resto de los gobiernos de la región. El trato preferencial a Brasil corre en este sentido, así como la estrategia de evitar cuestionamientos directos al gobierno y la figura de Chávez.

En segundo lugar, el avance de gobiernos elegidos democráticamente y que no responden a los intereses de Washington (que incluyen, según EE.UU., al nuevo gobierno de Bolivia y también al argentino, como también un potencial triunfo de Humala en Perú y de López Obrador en México) está produciendo un cambio en la estrategia de Washington, ante la necesidad de deslegitimar a estos procesos que no pueden ser acusados de dictatoriales tal como fue el argumento hasta el momento utilizado hacia otros países del mundo (Afganistán, Irak y Corea del Norte, por citar sólo algunos ejemplos). El nuevo argumento implica que no sólo se llega al gobierno con los votos, sino que también hay que seguir una receta en la forma de gobernar impulsado desde las alturas de la Casa Blanca o el Departamento de Estado norteamericano.

Argentina

Apenas transitados los primeros meses de 2006, se han ido desplegando varios ejes de enfrentamiento entre fracciones de la burguesía y entre las clases sociales. Por un lado, el bloque de capital más concentrado a nivel mundial relanzó sus críticas y presiones contra el gobierno. Por otro, en el “territorio” privatizado, el boicot organizado por Suez contrastó con la disposición del capital español a aliarse a la fracción de capital local que intenta regular el manejo de las comunicaciones y los recursos estratégicos concesionados. En este contexto, el gobierno pospuso por tercera vez el llamado a licitación para una reprivatización del correo, manteniendo el servicio bajo control estatal desde noviembre de 2003, cuando le fue quitada la concesión a Macri por incumplimientos contractuales.

Finalmente, una *alianza social* formada por fracciones del capital y del movimiento obrero condujo la política

de relaciones con Brasil, al mismo tiempo que se fisuró internamente, enfrentados sus componentes de clase (capital versus trabajo) por la distribución de la riqueza social.

Mientras tanto, veremos cómo la aprobación legislativa de la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno ayudó a terminar de configurar los espacios políticos oficialistas y opositores, aunque agudizó las contradicciones al interior de los mismos.

Analizaremos también los conflictos desatados por la movilización y organización popular en tomo a la suba de impuestos municipales en la provincia de Buenos Aires, el conflicto salarial de los trabajadores del petróleo en Santa Cruz, y el rechazo a la instalación de las papeles encabezado por la asamblea de Gualeguaychú.

Pelea por las ganancias

Los focos externos de presión (y su respuesta)

A comienzos del año 2006, una batería de presiones dirigidas contra el gobierno nacional llegó desde los centros internacionales del capital más concentrado a escala mundial.

El Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que representa a los bancos más poderosos del mundo (Citibank, Deutsch Bank, Societe General, etc.), advirtió en un informe difundido a escala mundial que la Argentina recibirá en 2006 un “bajo flujo” de capitales en relación con años anteriores. Según el texto, sólo 4.300 millones de dólares llegarán al país en calidad de inversiones directas, siendo el monto “mucho más bajo que el flujo de 9.000 millones que recibió anualmente en promedio entre 1995 y 2000”. El Instituto analiza que la mengua es resultado del “poliñizado y caprichoso ambiente regulatorio” predominante en la Argentina, y recuerda que “el Fondo Monetario y otros criticaron al gobierno por algunas de sus acciones con respecto a los inversores”. El propio director ejecutivo del organismo, Charles Dallara, dijo a los medios locales que “Las políticas de Argentina en los últimos años decididamente no han sido amistosas para el capital extranjero” (C 20/1).

Más que consignar los resultados de su análisis, el influyente IFF, en rigor, operó como un generador de opinión y acción. Sus “previsiones” son la anticipación de lo que los capitales más concentrados del mundo deliberadamente harán o dejarán de hacer. *Hacer y no hacer* que determina el comportamiento de otros capitales “menores”, a escala mundial, regional y nacional. La aparente previsión (“las inversiones externas en la Argentina serán más bajas que 1995/2000”) es una amenaza de boicot, dado el contexto de control de capitales impuesto en la gestión Lavagna y profundizado por Fe-

lisa Miceli. Veremos más adelante de qué medias de control particulares estamos hablando.

Unos meses atrás, el periódico norteamericano The New York Times también opinaba en la misma línea opositora del IIF: “Desde una victoria electoral en octubre, Kirchner avanzó para establecer una alianza con el líder populista de Venezuela, Hugo Chávez, y para extender el control estatal de la economía, el Poder Judicial y los medios de comunicación” (C 4/1).

A principios del mes pasado, el francés Pascal Lamy, titular de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que fija las reglas para el comercio internacional, llegó a la Argentina para reunirse con el presidente Néstor Kirchner. A la pregunta de un medio “¿cuál es el mensaje que le trae a Kirchner?”, Lamy respondió: “teniendo en cuenta la posición argentina en materia de bienes y competitividad, la apertura comercial es la forma correcta para reducir pobreza y crear empleos. Siempre que las políticas internas sean las correctas, la apertura del comercio es una condición necesaria para todo esto” (C 3/2).

Inmediatamente, la réplica llegó desde el titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, quien criticó la amplitud y profundidad de la apertura económica propuesta por la OMC: “tenga en cuenta la realidad de nuestra reciente negativa experiencia, a la luz de los resultados que exhibió una apertura indiscriminada practicada durante casi una década” (C 4/2).

La disputa aquí descripta entre *fracciones del capital*, y que se desplegó sin demasiadas voces entre enero y febrero del corriente año, tuvo que ver con el grado de “libertad de acción” de los capitales en el marco del estado nación argentino. Las medidas de política económica que repudian los capitales más concentrados del mundo, cuyos centros de organización y acción se encuentran en el exterior, son aquellas que desde 2002 (y

fundamentalmente con el ascenso de Néstor Kirchner a la presidencia) controlan el movimiento del capital. Entre las más importantes observamos la aplicación de las retenciones, mecanismo “clásico” de transferencia de ingresos (desde el campo y las ramas de la industria más vinculada a éste, a otras ramas de la actividad industrial) que, además, se ha convertido en un dispositivo de control de los precios internos. En este mismo sentido, cabe decir que el gobierno ha intentado avanzar con el control de los precios en el mercado interno operando con organizaciones del capital medio y pequeño (como la CAME -ver más adelante-). Por otro lado, la negociación con los acreedores externos determinó que una parte gruesa de la deuda contraída quede en manos de los capitales que explotan fuerza de trabajo en la Argentina. También, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos privatizados y el examen de las inversiones comprometidas por los concesionarios (al menos como programa a imponer, según las relaciones de fuerza existentes) reflejó la necesidad de regular, por parte de una fracción del capital, la producción y distribución de los recursos estratégicos. En esta pelea, no es menor el dato de la estatización del correo, del “espacio” aéreo de comunicaciones y de una línea de ferrocarriles. Finalmente, podemos citar la aplicación de aranceles y mecanismos de protección a la producción local de mercancías, la regulación de las exportaciones mediante el Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y el mecanismo de control al ingreso de capitales, que exige una permanencia mínima en el país de un año (intentando canalizar la inversión extranjera hacia la producción, en detrimento del “juego” estrictamente financiero).

La pregunta es entonces ¿qué fracciones del capital forman la base de las políticas económicas clave del gobierno de Kirchner?

El “territorio” privatizado. Lucha, fugas y alianzas

Una de las fracciones del capital más concentrado en el país (fracción de la oligarquía financiera) con asiento en algunas ramas de la industria ha intentado, a partir de enero de 2002 (con mayor o menor eficiencia), regular el manejo de las comunicaciones y los recursos estratégicos nacionales, privatizados durante la década del noventa. Esos capitales, que participaron del proceso de privatización, y que resultaron enormemente beneficiados tras haber recibido a precio de “ganga” las concesiones de los servicios públicos para venderlos luego, en su mayor medida, a compañías extranjeras, son los que, aliados a los capitales medios locales, impusieron o intentaron imponer desde el gobierno del estado una serie de controles a los concesionarios: desde el límite en el aumento de las tarifas (muchas de ellas congeladas desde la devaluación) hasta el cumplimiento de la pauta de inversiones. Todo esto con el doble objetivo de conte-

ner el crecimiento en los costos, insostenible para algunas ramas de la producción y la distribución, y de calmar la agitación social (en ascenso hasta mediados de 2002 y aún latente), por un lado; y de establecer un mínimo desarrollo de los recursos energéticos, que garantice a ramas enteras de la producción local el acceso a los mismos, por el otro. La herramienta de presión fundamental del gobierno nacional, en el contexto de las negociaciones con las privatizadas, ha sido la directa reestatización de algunos ítems. Medida “extrema” cuya extensión a otras ramas no ha encontrado base de apoyo en ninguna fracción del capital.

Teniendo en cuenta esta situación general, veremos el despliegue de la disputa con Aguas Argentinas y la consolidación de la alianza con una fracción del capital español más concentrado.

Aguas calientes

En octubre de 2005, los directores del grupo francés Suez, accionista mayoritario de Aguas Argentinas, anunciaban en medio de una fuerte disputa con el gobierno nacional su retiro definitivo del país. El “desacople” de la compañía lejos de desenvolverse pacíficamente estuvo caracterizado por acusaciones y amenazas cruzadas. Además de mantener la demanda por 1.700 millones de dólares contra el Estado argentino en el tribunal internacional del Banco Mundial (el CIADI), Suez amenazaba con sumar otros miles de millones en calidad de “indemnización”, considerándose expulsada del país. El gobierno argentino, fundamentalmente en las voces del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del propio presidente Néstor Kirchner, hacía lo propio anunciando litigar a la compañía por incumplimiento del contrato (abandono del servicio y falta de ejecución de obras e inversiones pautadas).

Sin conciliación posible entre las partes, el sindicato que agrupa a los trabajadores de Aguas Argentinas envió un comunicado a toda la planta llamando a la desobediencia de cualquier dirección patronal que implicara la interrupción o la limitación del servicio. El documento que ponía “blanco sobre negro” respecto del alineamiento con el gobierno o con la empresa decía: “*Nos dirigimos a todos los cuadros de conducción y trabajadores en general, preocupados por los inconvenientes que provocaran las altas temperaturas de verano, situación que año tras año compromete la normal prestación de los servicios (...) se debe superar cualquier directiva en el nivel de conducción que altere el normal funcionamiento de tan vital servicio. Por lo tanto, convocamos a todo el cuerpo general de delegados a informar a esta conducción gremial sobre cualquier modificación en las estructuras de bombeo que comprometa lo anteriormente expresado*”. El secretario general del sindicato, José Luis Lingieri, agregaba en los medios: “*Nosotros le decimos a la gente que tiene que trabajar a full; si la empresa da la orden de restringir el servicio para ahorrar, nosotros les decimos a los trabajadores que sigan, que el gre-*

mio los respalda. Si la empresa quiere trabajar con restricciones, vamos a pasar por encima de ellos” (LN 12/1).

Paralelamente, el grupo Suez rompía definitivamente con el gobierno de Santa Fe y abandonaba precipitadamente la prestación del servicio en la provincia, disolviendo la empresa Aguas de Santa Fe. El comunicado de la compañía decía: “se llegó a esta instancia no deseada, después de cuatro años de esfuerzos permanentes en aras de mantener la concesión de los servicios, tras ocho meses de gestiones en procura de darle continuidad a la gestión privada” (C 14/1).

Como es su costumbre, el periódico La Nación, órgano de la fracción “ultraliberal” del capital, definió los límites máximos de la pelea: todo menos la estatización de los servicios. “La crisis de la empresa Aguas Argentinas parece lejos de encontrar una solución satisfactoria y la reestatización podría ser una salida, por cierto muy distante de lo ideal. La negociación no ha encontrado hasta ahora una vía de salida y la reestatización parece inevitable. La comparación de la experiencia de una explotación estatal y una privada no deja dudas sobre la inconveniencia del desenlace que se espera de esta cuestión. En todo caso, si así fuera, sería deseable que con la mayor brevedad fueran concesionados nuevamente los servicios. Esto es, que no se repita el modelo del Correo Argentino, que fue reestatizado por un plazo de 60 días que se extendió por mucho tiempo más y que hoy sigue en la órbita del Estado” (LN 20/1)

Finalmente, fue el presidente Néstor Kirchner quien mantuvo la línea “dura” en la disputa con Suez denunciando, de cara al futuro enfrentamiento judicial, los incumplimientos básicos del capital: “No puede ser que haya distritos en la Argentina que tengan sólo el 20 por ciento de la población con agua potable (...) Es lo que hizo esa empresa Aguas Argentinas, que tantas vueltas está dando” (LN 23/2).

Un día después, el francés Yves Thibault de Silguy, manifestando el carácter irreversible de la disputa, presentaba su renuncia como titular de Aguas Argentinas, criticando el “contexto lleno de incertidumbre y de ataques injustificados contra el balance de nuestro trabajo” (C 24/2).

La alianza con la oligarquía financiera española

A comienzos de febrero, el secretario de Asuntos Exteriores del Estado español, Bernardino León, afirmaba en el senado de ese país que el gobierno de la península reclamaría a las autoridades argentinas un mejor tratamiento en las negociaciones con las empresas de capital español. El canciller hispano, Miguel Angel Moratinos, era el encargado de transmitir la demanda “cara a cara” al presidente Kirchner. En esa oportunidad, León informó a los legisladores: “el gobierno sigue con atención las negociaciones con el gobierno argentino y esperamos que se concreten los ajustes tarifarios que hagan posible que nuestras empresas tengan unos horizontes de negocios razonables, que aseguren su permanencia en el país” (LN 4/2).

Días después, Moratinos llegaba a Buenos Aires pero su mensaje, dirigido al anfitrión, Néstor Kirchner, no coincidía con las palabras de León. El canciller español en la Casa Rosada declaraba que “lo que queremos es dar un

mayor impulso a las inversiones españolas e iniciar una nueva presencia española acorde al bienestar del desarrollo económico social de Argentina” (C 16/2).

Ese mismo día, junto a Moratinos, se cerraba un acuerdo con la compañía española Telefónica. En éste, el gobierno cedía a la empresa un acotado aumento tarifario en el bloque horario de 20 a 21 horas y la dolarización de las comunicaciones que se realizan desde el exterior (carga que debe pagar quien realiza la llamada), mientras Telefónica, también de manera mínima, suspendía por 10 meses los juicios contra el Estado argentino en el CIADI –que llegan a 2.834 millones de dólares– y anunciaba inversiones por mil millones de pesos, ejecutables en 2006.

De esta manera el gobierno dividía el frente de las privatizadas, aceptando la alianza estratégica con una fracción de la oligarquía financiera española. Ésta, actuando en contra de otras fracciones del capital español (representadas en las palabras de Bernardino León) y cediendo una parte de sus demandas, se aseguraba la propiedad de la perla del imperialismo español en Argentina (y en América Latina): Repsol-YPF.

La realización de la alianza en el gobierno: proteccionismo en el comercio con Brasil. El capital y el movimiento obrero

Tensión y acuerdo comercial con Brasil

Apenas iniciado el año 2006 se hicieron públicos los datos generales sobre el comercio con Brasil. Si bien en 2005 las exportaciones argentinas al país vecino habían ascendido en un 12%, las importaciones desde Brasil lo hacían en un 34,5%. Esta diferencia daba como resultado un déficit comercial en la balanza argentina con Brasil por 3.676 millones de dólares, lo que significaba un crecimiento del rojo comercial de 103,4%, en relación con el año 2004 (C 14/1).

Quedaba en evidencia que, no obstante las medidas mínimas de protección comercial aplicadas por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, sobre algunos artículos particulares, y la revaluación de la moneda brasileña (en relación al dólar y, por consiguiente, al peso) que encarece los productos de dicho país, la tendencia creciente de la Argentina a importar bienes industrializados de los capitales brasileños más concentrados, era irreversible.

En este sentido, cabe mencionar que los principales productos exportados a Brasil son el trigo y los petroquímicos. Algunos ganan y otros pierden.

En este contexto, y expresando los intereses de la fracción de capital amenazado por el avance de los productos (y los capitales) de Brasil, Néstor Kirchner, manifestó en Brasilia: “El Mercosur debe dotarse hacia su interior de lo que reclama hacia fuera: la atención de las asimetrías que se refieren a las dificultades que la integración crea a las economías de menor escala”. El presidente argentino en su alocución

puntualizaba uno de los ítems más rípidos en la relación regional: las políticas de atracción de capitales inversores. Kirchner llamaba a tener *“una actitud solidaria [en cuanto a] las políticas de localización de inversiones”* (C 19/1).

Lo mismo decía en la capital brasileña la ministra de Economía, Felisa Miceli, reunida con el ministro de Desarrollo e Industria, Luiz Fernando Furlán: *“Nos preocupa que la integración sea efectiva no sólo en materia comercial sino también de inversiones”* (C 19/1).

Con todo esto, iniciado el mes de febrero, las presiones desembocaron en la inauguración, por parte de los gobiernos de Argentina y Brasil, de un nuevo mecanismo de protección nacional. Denominado *Mecanismo de Adecuación Comercial* (MAC), el sistema limita las importaciones del país vecino de aquellos productos que dañen la producción nacional. En la práctica, el país importador al aplicar el MAC a determinado producto impone un arancel cuya tasa se asemeja a la que se les aplica a los bienes provenientes desde fuera del Mercosur.

En la Argentina, varias fueron las voces que manifestaron su satisfacción, demostrando ser la base social de apoyo a la medida proteccionista.

La alianza en el gobierno en la relación con Brasil

Para las distintas fracciones del capital en la Argentina la relación con Brasil es de suma importancia: por configurarse como un mercado de peso, para el campo argentino por ejemplo; o por formar un aliado estratégico en la disputa con los capitales más concentrados del mundo (como por ejemplo, en el caso del capital norteamericano y su proyecto de creación de una zona de libre comercio continental, el ALCA). Pero, paradójicamente, la fracción del capital en la Argentina vinculada a la industria que más requiere de la alianza con la burguesía brasileña, contiene a toda una capa de burguesía cuya reproducción se encuentra siempre amenazada por el avance de los productos y capitales del país vecino. La industria brasileña, cuyos capitales se hayan más concentrados en la mayoría de las ramas de la actividad, necesita a su vez desbordar la frontera con Argentina. No sólo en materia comercial ese ingreso ha sido patente, tal como hemos citado más arriba, sino que, desde la devaluación, el capital brasileño ha venido comprando compañías líderes argentinas (Quilmes, Loma Negra, Gaffa, Pecom, entre otras).

Con todo, la aplicación de medidas de protección para ramas enteras de la industria, que resultaron de las sistemáticas insistencias del gobierno y de las sucesivas negociaciones bilaterales, expresó el interés de una *fracción del capital* aliada a una *fracción del movimiento obrero*. Fracción obrera que se manifestó públicamente alineada a favor de las medidas de protección. Por lo pronto, decimos que esta *alianza social*, dominada por la fracción del capital más concentrado (oligarquía financiera), rea-

lizó su interés en la implementación de la política de acuerdo con Brasil. Veamos qué expresiones del capital conforman esa alianza social.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez afirmó que *“estas negociaciones permitieron arribar a una decisión estratégica a favor de la reindustrialización de nuestro país y el desarrollo armónico de los Estados parte”* (LN 2/2).

En el nucleamiento de las industrias textiles, por la Fundación Pro-Tejer, su presidente, Aldo Karagozian, dijo: *“el acuerdo permitirá evitar la invasión de productos brasileños al país y su consecuente destrucción de industrias y puestos de trabajo”* (LN 2/2).

Enrique Mantilla, titular de la Cámara de Exportadores (CERA) también opinó que *“Era muy importante que los gobiernos se pusieran de acuerdo en un tema tan sensible para el comercio bilateral”*, aunque advirtió que *“no están contempladas las políticas públicas que distorsionan la competitividad de las exportaciones”* (LN 2/2).

La Cámara de la Indumentaria, en la voz de su presidente Ignacio de Mendiguren, elogió: *“estoy muy conforme porque cubre un vacío importante en el comercio dentro del Mercosur. Creo que los términos acordados acercarán un mayor número de inversiones”* (C 2/2).

Lo mismo dijo del acuerdo el ya citado Héctor Méndez, ahora como titular de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP): *“será un elemento de juicio fundamental para potenciar nuevas inversiones y favorecer la reindustrialización en marcha”* (C 3/2).

Al mismo tiempo, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) publicaba que *“con la tarea emprendida han sabido restablecer las bases para el relanzamiento virtuoso de la integración regional”* (C 3/2).

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Juan Carlos Lascurain dijo que el acuerdo *“es importante para la industria, ya que esperamos que sigan en alza los niveles de inversión y por ende la creación de más empleos en el sector”* (C 2/2).

Por su parte, la Federación Económica de la Provincia de Bs.As. ponderó: *“El Gobierno ha logrado un avance fundamental en la consolidación de las relaciones comerciales y la fortaleza del Mercosur. Esto significa para la Argentina una posibilidad de incrementar el comercio con los demás estados miembros”* (C 2/2).

Quienes también expresaron su apoyo fueron la Cámara de la Industria del Calzado; la Cámara de Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas, Rodados y Afines; la Confederación de la Mediana Empresa (CAME); y la Confederación General Económica (CGE).

Finalmente, desde el movimiento obrero se publicó en la prensa escrita nacional una solicitada titulada: *“El Movimiento Obrero valora, como nadie, la defensa del trabajo argentino”*. La firma correspondía a la Confederación de Gremios Industriales, integrada por: Unión Obrera Metalúrgica; Asociación Obrera Textil; Federación del Ves-

tido; Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombreados y Lavaderos; Federación de Trabajadores Pasteleros Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros; Asociación de Supervisores Metalúrgicos; Sindicato Obreros y Empleados de la Madera de Cap.Fed.; Unión de Cortadores de la Indumentaria; Federación de Obreros y Empleados Aceiteros; Federación de Obreros del Tabaco; Sindicato de Obreros del Caucho; Federación de Trabajadores Vitivinícolas; Asociación Obrera Minera; Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado; Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado.

En dicho documento se afirmaba: *'Consecuentes con nuestra doctrina, estructurada en el principio de colaboración entre el capital y el trabajo, que ha caracterizado el accionar del movimiento obrero organizado desde su constitución, supimos ponernos al lado de los empresarios, en la lucha por la defensa de la industria nacional, cuando todavía muchos sectores estaban encañilados con la fantasía de una apertura suizada.*

Alertamos sobre la necesidad de una integración fecunda, nacida del equilibrio, que demandaba una participación decisiva del Estado para armonizar las asimetrías sectoriales (...) El Mecanismo de Adaptación Competitiva constituye una conquista singular, que quiebra un lamentable ciclo de políticas pusilánimes que facilitaron la destrucción de nuestra industria.

Muchas Gracias, Dr. Néstor Kirchner" (C 8/2).

La oposición a la política de protección

Un año y tres meses atrás, la poderosa corporación que nuclea a los capitales más concentrados en el país, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), se había manifestado tajantemente en contra de cualquier medida de protección comercial. A favor de un librecambio que beneficia precisamente a los capitales cuyo grado de concentración es mayor, el titular de la AEA, Luis Pagani, advertía: *"Si con este tipo de cambio no sos competitivo, por más que pongas protección... El mundo es más competitivo que Brasil. Con este tipo de cambio tenés que ser competitivo. Son competitivos las agroindustria, el sector farmacéutico, el software, el diseño"* (LN 16/12/04).

El contrapunto llegó desde uno de los grupos económicos locales más concentrados y con mayor capacidad de expansión a nivel continental: el grupo Techint. Su director de Relaciones Institucionales, Luis Betnaza respondía a Pagani: *"Es verdad que Brasil es una amenaza menor que China, pero eso no quita que el calzado, la indumentaria y los electrodomésticos de Brasil vengan subsidiados"* (LN 16/12/04). Resulta revelador cómo Techint intervenía, en ese momento, como la fracción de la oligarquía financiera local que necesariamente debe contener los intereses de los capitales medios locales.

La lucha en el interior de la alianza en el gobierno: la distribución de la riqueza

En un contexto de ascenso en el ciclo económico, que explica la baja del desempleo al 10,1%, según las variables elaboradas por el Indec, la disputa por el precio de la fuerza del trabajo (salario) se ha venido profundizando en el último año, cuando menos.

En la edición pasada del *Análisis...* (n° 68) sintetizamos ordenadamente los distintos posicionamientos en relación a la disputa salarial. Allí observábamos que todas las expresiones del capital se habían manifestado abiertamente en contra de cualquier programa de suba salarial general (o particular, por rama), exceptuando a la CAME (mediana y pequeña burguesía) que, junto con la Confederación General del Trabajo (CGT) se posicionaba a favor de una mayor distribución del ingreso hacia los trabajadores.

Veremos ahora la expresión que tomó la lucha entre el capital y el trabajo por la distribución de la riqueza (salario e impuestos) en el interior de la *alianza social* descrita más arriba; situación que pone en cuestión la continuidad de la misma.

A principios del mes pasado, en el plenario regional de la CGT en Comodoro Rivadavia se reclamó al gobierno que *"derogue o exceptúe a los trabajadores patagónicos en relación de dependencia, con o sin convenio, y a jubilados"* del pago del impuesto a las Ganancias. Al mismo tiempo, los sindicatos declararon *"el estado de alerta y movilización de todos los trabajadores patagónicos"* (C 3/2).

Pocos días después, desde la UIA, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja advertía que el resultado de las presiones salariales *"dependerá de la rentabilidad de los sectores y de la firmeza que adopte el Gobierno para encauzar la discusión"* (C 5/2).

El ya citado titular de entidad industrial, Héctor Méndez, afirmaba en un diálogo con el matutino Clarín: *"El salario industrial está al límite. Tiene que ir de la mano de la producción. No se les va a poder pedir mucho más a las fábricas porque aquí los salarios están por encima de lo que aumentó el costo de vida"*. Férreo opositor a los aumentos generales que incluyen a toda la línea de los asalariados (por lo menos a los registrados o "en blanco"), Méndez advertía que *"hubo desbandes: sectores que crecieron mucho en salarios y otros que no y ahora es difícil de manejar"* (C 13/2).

Finalmente, el 24 de febrero, la central sindical emitió un documento firmado por los dirigentes Hugo Moyano, José Luis Lingieri y Juan Manuel Palacios en donde se exigía que *"la distribución equitativa del ingreso deje de ser un slogan discursivo para convertirse en el fundamento de grandeza nacional"* (LN 25/2). El reclamo incluyó la integración de los trabajadores no registrados al sistema legal: *"Mientras haya excluidos, no habrá justicia social; mientras exista el trabajo en negro, no habrá recuperación real del bienestar general"* (C 25/2).

Coyuntura política

En tanto, en la coyuntura política, analizaremos cómo la reforma del Consejo de la Magistratura acentuó el desarrollo de las tendencias en la construcción de los diferentes espacios, creando una especie de trabalenguas político, con oficialismo oficialista y oficialismo opositor, y oposición oficialista y oposición opositora, que a su vez se fractura por ver quién se opone más y mejor.

Por otro lado, analizaremos cómo tres conflictos con movilización y organización popular fueron los encargados de “escribir” la agenda política del mes. Se trata de las movilizaciones contra la suba de impuestos municipales en la provincia de Buenos Aires, el paro, corte de rutas y enfrentamiento de los trabajadores del petróleo en Santa Cruz, y el corte “para siempre” de dos de los puentes internacionales que unen la Argentina con Uruguay, realizados por las Asambleas de Gualeguaychú y de Colón, en rechazo a la instalación de las papeleras Botnia y Ence en el margen oriental del río Uruguay, colocando el tema a nivel nacional y hasta internacional.

PJ bonaerense: Un apoyo incondicional, condicionado por donde se lo mire

En números anteriores hemos analizado exhaustivamente cómo, a partir de las elecciones de octubre del año pasado, el PJ bonaerense comenzó su reestructuración, con el desbande de las filas duhaldistas hacia el kirchnerismo, en un doble movimiento: por un lado, acercarse al presidente Kirchner y mantener así las cuotas de poder local en las respectivas intendencias, y por el otro, mantener en sus manos la estructura partidaria, con independencia relativa tanto de Kirchner como del gobernador Felipe Solá.

Durante febrero concluyó este doble movimiento, haciendo explícito en el congreso partidario el “apoyo” a Kirchner, poniendo a su vez límites respecto de la construcción del Frente para la Victoria.

Del lado de los ex duhaldistas, la primera explicación pública del mes estuvo a cargo del intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto: *“Se hizo la elección, hubo un ganador que fue el Presidente, nosotros apoyamos a “Chiche”, pero terminada la elección nosotros somos peronistas, el Presidente es peronista y tenemos que ayudar a gobernar”* (C 3/2). El mismo día, el propio gobernador Solá les contestaba *“a los que creen que de un día para el otro pueden reconvertirse y que no hubo castigo (...) Yo no soy el portero del Frente para la Victoria, pero sí les aseguro que el Frente para la Victoria es más que el PJ”* (C 3/2).

Las declaraciones tenían un motivo claro: prepararse para el encuentro en que se definirían las autoridades partidarias tras la derrota del duhaldismo. Solá se presentaba así para participar en tal decisión desde la estructura del Frente para la Victoria, frente al bloque conformado por quienes tienen su expresión parlamentaria reunidos en el denominado Peronismo Federal.

El resultado del choque fue el doble movimiento descrito más arriba de adhesión y delimitación: *“Por unanimidad y después de tres horas de intensos debates, el peronismo bonaerense decidió anochecer respaldar las políticas del presidente Kirchner y la gobernabilidad en los ámbitos provincial y municipal”, pero se negó a modificar la conducción partidaria, tal como lo había reclamado durante la tarde el gobernador Felipe Solá (...). Con el apoyo de quienes hasta las últimas elecciones se consideraban duhaldistas, el presidente del partido defendió la independencia del Consejo, en un claro mensaje a Solá. El núcleo que conduce el PJ de Buenos Aires está integrado en su mayoría por dirigentes que no guardan una muy buena relación con Solá”* (LN 7/2).

Unas semanas más tarde, y con el “pase” al kirchnerismo oficializado, el conductor del PJ bonaerense y del Peronismo Federal (bloque de legisladores en el que conviven conciliadores y críticos del Gobierno nacional), José María Díaz Bancalari, acentuaba la delimitación del terreno respecto del kirchnerismo “puro”: *“No somos lo mismo, Lo digo con toda claridad: no vamos a integrar el Frente para la Victoria, somos del PJ bonaerense (...). Si las alternativas son Carrió, López Murphy y Macri, no tengo ninguna duda de que optaría por Kirchner. Ninguna. Soy peronista. [Pero] No somos lo mismo; si no, nos hubiéramos pasado al Frente para la Victoria”* (LN 27/2).

Se reforma la Magistratura y cruje la oposición

Finalmente, durante el mes de febrero, el Gobierno logró la aprobación del Legislativo para reformar el Consejo de la Magistratura. Las implicancias de tal hecho fueron descritas en nuestro *Análisis...* n° 67, “El territorio jurídico”. Los posicionamientos al respecto continuaron sin mayores cambios de lo visto entonces: amplio rechazo de las organizaciones corporativas en torno al territorio jurídico junto a todo el arco de oposición política por un lado; kirchnerismo con aliados tanto en el Peronismo Federal (bloque que votará dividido), como en la UCR y en otras agrupaciones políticas menores por el otro.

El día de la votación en Diputados, las dos posiciones realizaban sus últimos actos. Kirchner reafirmaba en un discurso dirigido a los Diputados los conceptos vertidos desde hace meses en torno a la reforma planteada: *“Diputados, avancen y sancionen el Consejo de la Magistratura, den un ejemplo a la sociedad de que no tienen miedo y terminen con las ataduras e intereses políticos que nos son los del pueblo (...). Hoy estamos haciendo una reforma que obviamente todas las corporaciones vetustas y viejas, como el Colegio de Abogados, están en contra, porque tenían ahí su quintita (...). Siempre la dirigencia política tiene miedo de avanzar contra las corporaciones porque pueden presionarlos, criticarlos o quitarles sus favores”* (C 23/2). Mientras tanto, frente al Congreso, se manifestaban diversas organizaciones convocadas por el Colegio de

Abogados, en torno de la consigna “*Por la independencia del Poder Judicial*” (C 23/2).

Sin embargo, hubo algunas sorpresas el 22 de febrero, fecha en que se debatió y aprobó el proyecto en Diputados, con 149 votos afirmativos, 89 negativos y 1 abstención. 19 miembros del Peronismo Federal votaron a favor, y 12 en contra. Entre los primeros, se encuentran algunos hasta el momento férreos opositores, como Luis Barrionuevo, Oscar Rodríguez o Mabel Müller (C 24/2). Pero también el hecho agudizó la fractura del bloque: “*Yo ya me siento fuera del bloque*” pronunció *Cristián Ritondo (Capital)*” (LN 24/2).

En tanto, en la UCR, 5 diputados, respondiendo a gobernadores radicales con acercamiento al kirchnerismo, votaron a favor de la reforma: Cuevas, Brue, Oliva, Colombi y Collantes. La respuesta no se hizo esperar, aunque esto provocó la profundización de las contradicciones internas en el radicalismo, si es que esto es posible: “*El presidente de la UCR, Roberto Iglesias, anunció que pretende expulsar del partido a los cinco diputados que apoyaron la polémica reforma del Consejo de la Magistratura. En un comunicado que emitió el Comité Nacional, que preside Iglesias, se acusó a los legisladores díscolos de ‘inconducta partidaria’ y de ‘violentar los principios éticos’ de la UCR con su voto. Y por eso se pidió a los órganos de disciplina partidarios la ‘inmediata expulsión’ (...). Para sumar confusión, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Fernando Chironi, admitió que parte del bloque no acuerda con la drástica medida que se anunció desde el Comité Nacional y él tampoco. ‘Estas cosas deben resolverse desde la política más que desde la disciplina. Hay que propiciar un clima de serenidad donde discutamos el problema de los radicales que gestionan, que no tienen la misma independencia del Poder Ejecutivo que los demás’*” (LN 24/2).

La votación, en otra de las sorpresas, generó problemas en la construcción del armado político encabezado por Mauricio Macri y Ricardo López Murphy. Es que dos diputados del Partido Renovador de Salta, Miguel Zottos y Carlos Sosa, que conforman el Interbloque Propuesta Federal de centro-derecha, votaron afirmativamente por la reforma, lo que les acarrió, una semana después, la expulsión de dicho espacio (LN 1/3).

Pero éste no era el primer problema que surgía en el Interbloque durante febrero. Lo primero fue el intento fallido de acercarse al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien rechazó de plano la propuesta. Al mismo tiempo, la ex menemista y diputada nacional Paola Spátola electa por Pro-Buenos Aires, “*formalizó su separación de la bancada y la creación del unibloque Guardia Peronista, el nombre de la agrupación justicialista con la que acompañó a Ricardo López Murphy durante la campaña electoral del año último*” (LN 10/2). Spátola votaría, dos semanas después, acompañando al kirchnerismo.

Pero hubo más aún. En su intento de construcción de liderazgo en la carrera presidencial 2007, Macri avanzó en las reuniones con el gobernador neuquino Jorge Sobisch. Ante el anuncio del encuentro, el otro socio, Ló-

pez Murphy, declaraba: “*Yo no voy a estar ahí, voy a estar en casa o trabajando*”.

Papelera, petróleo e impuestos... “y el abajo que se mueve”

Mientras todo esto sucedía en la cúspide política, por debajo se sucedían tres hechos que, surgidos en la movilización popular, obligaban a la reacción gubernamental: por un lado, la suba de tasas municipales generaba la reacción de las poblaciones afectadas, desatando además un conflicto entre el gobierno nacional y las intendencias bonaerenses. Por otro lado, en Las Heras, provincia de Santa Cruz, una huelga de los trabajadores del petróleo que incluyó cortes de rutas y la detención de su máximo dirigente local, se desenvolvía hacia un enfrentamiento entre los manifestantes con la policía local, culminando con la muerte de un suboficial y el posicionamiento encontrado desde diferentes sectores tal como analizaremos enseguida. Por último, el conflicto por la instalación de dos papeleras en el margen oriental del río Uruguay a la altura de la ciudad de Gualeguaychú, tomaba magnitud nacional y hasta internacional, y al cierre de esta edición permanecía aún sin resolución.

Impuestos.

La suba en las tasas municipales decidida por distintas intendencias bonaerenses es variada, y la información publicada no siempre es muy clara y en algunos casos resulta contradictoria. En algunos casos, según la denuncia de organizaciones vecinales, llegaba hasta el 500%, como en Ituzáingo, y hasta el 600%, como en el Partido de la Costa. En otros casos, los aumentos anunciados fueron mucho menores, pero todos generaron protestas vecinales, con el resurgimiento de asambleas barriales, petitorios, movilizaciones y cortes de ruta. Algunos de los municipios en los que trascendió esta situación fueron Ituzáingo, Almirante Brown, Avellaneda, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa (C 23/2).

Ante este estado de movilización, llegaba la reacción presidencial: “*Quiero hacer un llamado de atención a algunos amigos y compañeros intendentes del conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires*” arrancó Kirchner. “*Estamos cuidando el bolsillo de la gente, cuidando los precios. No es hora de subir las tasas y de querer recaudar más por ese tributo. Les pido que den un paso atrás, que cuiden el bolsillo de la gente. Los estamos tratando de ayudar todo lo que podemos desde el gobierno nacional, y si en algún caso hay que hacer alguna adecuación que sea de a poquito y en su momento. Si se esperó tanto tiempo, creo que hoy no es momento de subir impuestos*” (LN 24/2).

Finalmente, el 28 de febrero, los intendentes acordaron suspender temporalmente los aumentos y decidieron conformar una comisión para estudiar el impacto de la medida en cada caso (LN 1/3).

Petróleo.

En Las Heras, provincia de Santa Cruz, los petroleros inician a fines de enero una huelga con cortes de rutas

provinciales en reclamo de la suba del mínimo imponible del impuesto a las Ganancias aplicado sobre su salario, entre otras reivindicaciones parciales. 15 días después, el 7 de febrero, la Justicia ordena el desalojo de las rutas, y para ello se decide, en primer término, encarcelar al dirigente local Mario Navarro, vocero de la asamblea de trabajadores, opositor a su vez de la conducción de la seccional local del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y del Gas Privado. Ante la detención en horas de la noche, los trabajadores junto a otros sectores de la comunidad se movilizan hacia el lugar de detención pidiendo la liberación de Navarro, la policía reprime la protesta, y se desata un enfrentamiento en el que muere un suboficial y otros cinco son heridos con armas de fuego.

A partir de allí, se suceden una catarsis de posicionamientos públicos que nos permitirán analizar la situación planteada.

En primer lugar, y con los hechos aún desarrollándose, la Justicia ordena liberar a Navarro, para descomprimir la situación. Seguidamente, el Gobierno nacional decide el envío de gendarmes, quienes en los días subsiguientes garantizan el despeje de las rutas, además de militarizar los pozos petroleros y la ciudad misma de Las Heras.

Más tarde, Navarro declara lo siguiente: *"Lamento profundamente lo ocurrido, siento tristeza, esto no tendría que haber ocurrido (...). No había compañeros armados (...). Pudo haber algunos infiltrados en esta movilización tan importante que se dio a raíz de mi detención"* (LN 8/2). Mientras tanto, el gobernador Sergio Acevedo condenaba los hechos señalando que *"Nada justifica la violencia como manera de resolver problemas" (...). Por otra parte, criticó a 'los dirigentes sociales, gremiales y de los medios que reivindican o justifican este tipo de acciones, ya que, en definitiva, están generando una cultura de la impunidad'"*. Previamente, había señalado en otro reportaje que *"El que siempre tiró leña y nafta al fuego fue el Partido Obrero. Lo reivindican como un mecanismo legítimo y válido"* (LN 8/2). Y en el mismo sentido se posicionaba el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda y ahora funcionario del gobierno nacional, Luis D'Elía: *"No es la primera vez que un grupo de pseudotroskistas de izquierda ataca con armas en la mano a un gobierno de altísimo consenso y legitimidad social"* (P12 8/2).

Tras la llegada de los gendarmes al lugar, y tomándose un día antes de realizar declaraciones públicas sobre lo sucedido, el presidente Kirchner defendió el accionar de la policía por no usar armas de fuego en la represión, diferenciando el accionar de la policía de Santa Cruz de otros *"grupos policiales que reprimieron a manifestantes con balas y asesinaron"*. Y respecto del dirigente petrolero Navarro, señaló: *"No es violento porque yo lo conozco, es un hombre que milita en otras ideas, pero en la noche algunos aprovecharon a disparar cobardemente (...). Algunos sectores que no tienen respuesta del pueblo en las elecciones reaccionan de esta forma"* (C 9/2).

Tres días después de lo sucedido, los petroleros llegaban a un acuerdo provisorio en lo salarial, y recomendaba la discusión a nivel nacional sobre la retención realizada a los salarios en forma de impuesto a las ganancias. Mas allá de cómo siga desarrollándose este conflicto en particular, lo cierto es que nuevamente un reclamo popular, en este caso de los trabajadores del petróleo, obligó a posicionarse a amplios sectores sociales (posicionamientos que sólo pudimos reproducir parcialmente debido a su cantidad y extensión). Eso es quizá lo que tienen en común los tres conflictos que estamos analizando. Sin embargo, lo distintivo del caso petrolero, es que se trata de un reclamo que no involucra al conjunto de la comunidad, más que por el arrastre que los salarios petroleros tienen sobre el resto de la población. Al mismo tiempo, y el grado de violencia lo prueba, otra particularidad es que cuando se tocan intereses tan fuertes como la renta petrolera, el grado de organización de los trabajadores y la represión aplicada desde el Estado se dan en una escala mayor. No es casual que, al cierre de esta edición, con los supuestos "culpables" detenidos, el corte de ruta levantado y garantizada la "paz social", los pozos petroleros funcionen con un alto grado de militarización interna, ya que por el momento no hay fecha cierta de retirada de las tropas de la gendarmería.

Papelelas.

El conflicto por la instalación de dos fábricas de pasta de celulosa, más conocidas como "papelelas", en la margen oriental del río Uruguay, frente a la turística ciudad entrerriana de Gualaguaychú, no es nuevo. Sin embargo, durante febrero, el conflicto tomó estado nacional, y hasta internacional, al decidir el Gobierno llevar la disputa al tribunal de La Haya. Es por ello que analizaremos este conflicto, teniendo en cuenta para la descripción los últimos días de diciembre, enero y, por supuesto, febrero, ya que en este periodo es donde toma el alcance mencionado.

Previo a ello, debemos recordar que hace varios años los vecinos de Gualaguaychú y organizaciones ambientales de la zona conformaron la Asamblea Ambiental de Gualaguaychú, y que el desarrollo del conflicto la fue ampliando, teniendo como momento de mayor despliegue, en abril de 2005, una multitudinaria movilización donde se calcula una participación de 40 mil personas, siendo éste el mayor precedente para el nivel que alcanzó la disputa en este comienzo de 2006.

A medida que terminaba 2005 y se acercaba la temporada veraniega, la Asamblea comenzó a plantearse el corte del puente internacional que une Gualaguaychú con Fray Bentos, Uruguay, como método de lucha, por la difusión que tendría el tema al interrumpir la circulación de turistas entre ambos países en plena temporada. Por ello, antes de finalizar el año, el matutino La Nación advertía sobre el problema de esta herramienta de lucha

elegida, en un editorial titulado *Los piquetes contra Uruguay*. En el mismo leíamos que esto resultaba un “acto de intolerancia” que perjudica a quienes “nada tienen que ver con el conflicto”, por lo que se les pedía a los “vecinos de Entre Ríos” que “reflexionen y depongan su actitud”. Asimismo se alertaba al gobierno nacional y al de Entre Ríos, para que “eviten este tipo de protestas y no alienten a los vecinos a llevar al extremo sus manifestaciones, avasallando el derecho de los demás argentinos y de pobladores uruguayos a transitar libremente” (LN 29/12).

En el mismo sentido se expresaba el ex presidente uruguayo, “colorado”, Julio María Sanguinetti: “No es legítimo el corte de ruta, es un acto de agresión. La libertad de tránsito es uno de los derechos humanos esenciales” (LN 29/12). Y también hacía lo propio el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano: “La gente es víctima de una serie de personas que se sienten con el poder de cerrar un puente” (LN 31/12).

Contrariamente, quien por entonces defendía la medida era el gobernador entrerriano, Jorge Busti, quien señalaba que el corte de ruta “es la única vía” (LN 31/12).

A partir de allí, la Asamblea va a realizar cortes del puente programados durante los primeros diez días de enero, para pasar a anunciar entonces la combinación de los mismos con cortes sorpresivos.

El día 13 de febrero, se pronuncia públicamente a favor de las medidas adoptadas por la Asamblea la Federación Agraria de Entre Ríos (LN 13/1), y la Aduana impide el paso de dos camiones provenientes de Chile que contenían materiales para la construcción de las papeleras ENCE y Botnia.

Ese mismo día se produce el corte simultáneo de los tres puentes internacionales (Gualeguaychú, Colón y Concordia) coordinando el accionar de las respectivas Asambleas. A partir de este hecho, la medida de lucha adoptada se va a volver más frecuente, cortándose cada vez más seguido, sobre todo el puente de Gualeguaychú.

Ante la combinación de medidas adoptadas por la Asamblea y las decisiones tomadas en los gobiernos nacional y provincial, La Nación decide volver a posicionarse por medio de su tradicional editorial: “Por segunda vez, la aduana argentina interceptó en la frontera con Uruguay un cargamento proveniente de Chile con elementos para la construcción de las plantas papeleras sobre el río Uruguay, al norte de Fray Bentos. Esto implica un acto de acción directa de un organismo oficial del gobierno argentino, que se suma a otros que, por omisión, constituyeron hechos fuera de los procedimientos aceptables del derecho internacional, los tratados vigentes y las buenas relaciones diplomáticas que deben perdurar entre dos países muy ligados por su historia y afinidad. Los cortes del tránsito en los puentes que unen ambos países, sin que la autoridad argentina haya siquiera intentado garantizar el libre tránsito como lo requieren los tratados, ya han colocado a nuestras autoridades en una delicada situación que sólo la prudencia del gobierno uruguayo ha evitado que se convierta en un conflicto más serio en las relaciones bilaterales” (LN 17/1).

Al día siguiente, este mismo matutino decide pasar las noticias referidas a las papeleras, de la sección de *Información General* (junto a las noticias de la moda y el verano) a la sección de *Política*, rebelando la mayor trascendencia que día a día los hechos van tomando.

Al mismo tiempo, comienza a hacerse público un trabajo más intensivo entre las cancillerías de ambos países, y la organización ecologista Greenpeace realiza una acción tomando simbólicamente una de las papeleras, para darle mayor trascendencia pública a la situación, y siendo detenidos sus activistas por la Prefectura uruguayo durante algunas horas.

Mientras tanto, los cortes siguen sucediéndose, y aumenta la cantidad de camiones “frenados” por dirigirse hacia las papeleras.

En este clima, el día 21, el gobernador entrerriano, Jorge Busti, de vacaciones en Cariló, se pronuncia por primera vez contra los cortes, señalando que tuvieron un efecto negativo, porque “se exacerbó el nacionalismo, y le permitió a Uruguay entonces llevar a ese terreno la discusión técnica. Pero era inevitable” (LN 22/1).

El mismo día, la Asamblea realiza un acto en la ciudad de Buenos Aires junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), siendo esta la única corporación empresaria que se pronuncia a favor de las medidas adoptadas, por lo menos con la fuerza suficiente como para que su mensaje sea publicado por los medios gráficos nacionales relevados.

Para el día 24, ya son 11 los camiones “frenados”, y se produce un nuevo pronunciamiento contrario a los cortes, esta vez de Aníbal Fernández, Ministro del Interior: “los cortes de ruta no son la manera correcta de salir de la situación, que debe ser evaluada ‘desde el punto de vista ambiental’” (P12 25/1)

Sin embargo, al día siguiente, tomando uno de los planteos de la Asamblea, el Gobierno anuncia que presentará el conflicto ante el tribunal de la Corte Internacional de La Haya, acusando a Uruguay de haber violado tratados bilaterales al autorizar la instalación de las papeleras unilateralmente. Un dato no menor es que sería la primera vez que el país recurre a esta instancia internacional para resolver un conflicto. Con dicho argumento, se le pide a la gobernación de Entre Ríos que su legislatura apruebe el pedido al Gobierno nacional, y este envía el pedido al Congreso nacional para que ambas cámaras respalden la medida, lo que se cumple en menos de un mes.

El mismo 25, dos gobernadores, ambos peronistas, y uno de ellos inclusive del propio kirchnerismo, se pronuncian en contra de lo realizado por los assembleístas. Felipe Solá, gobernador bonaerense, señala: “Si uno no tiene que ver con la creación de ese trabajo, es fácil oponerse o sentarse en una silla a tomar sol y cortar algo”. En el mismo sentido se pronunciaba el gobernador salteño, Juan Carlos Romero: “Los argentinos nos estamos acostumbrando a que cada uno tome la ley por su cuenta y eso es malo” (LN 26/1).

Al día siguiente, la Asamblea anuncia un corte por tiempo indeterminado, que durará dos días, y Busti vuelve a pronunciarse contra los cortes, al señalar que *"hay que buscar nuevas formas de protesta"* (LN 27/1).

Mientras tanto, toda la dirigencia política uruguaya se muestra compacta apoyando la intransigencia del presidente Tabaré Vázquez, al igual que las corporaciones empresarias.

Por su lado, La Nación vuelve a editorializar sobre el conflicto: *"El corte de tránsito en forma ininterrumpida que comenzó ayer en la ruta 136 que une Gualaguaychú con Fray Bentos, en momentos en que miles de argentinos y uruguayos comienzan sus vacaciones en la otra costa del río, es inaceptable y merece ser condenado"*. Y se vuelve a apelar a la desgracia sufrida por los *"ciudadanos comunes que nada tienen que ver con el conflicto"* (LN 28/1).

Dos días más tarde, el gobernador entrerriano vuelve a pronunciarse contra la medida: *"Los cortes de los puentes ya cumplieron con su misión: sirvieron para que todo el país se enterara de nuestra lucha; pero ya no son funcionales a nuestro objetivo, que es que no se instalen las papeleras"* (LN 30/1).

Mientras tanto, los cortes se siguen sucediendo, cada vez con mayor frecuencia, y los camiones siguen siendo retenidos, con la novedad de que desde Mendoza, les avisan a la Asamblea cuando camiones con origen chileno se dirigen hacia las papeleras.

El 2 de febrero, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) hace explícito su apoyo a la Asamblea (C 3/2), y continúa creciendo la preocupación editorializada en La Nación: *"El comienzo del verano 2006 ha sido tan agitado, que una conclusión posible a la que puede arribar hoy nuestra sociedad es que se afianzó la "cultura" piquetera y que, ante cualquier problema, la reacción inmediata será salir en grupo a cortar las calles y las rutas argentinas, sin importar las consecuencias y a quiénes perjudica. Testigo de ello son los muchos argentinos que comenzaron sus vacaciones o simplemente quisieron llegar a sus trabajos ejerciendo su derecho a circular libremente por el país. Los hechos y los motivos que se lo impidieron fueron variados y diversos: la continuación de las protestas contra las papeleras uruguayas, que concluyeron en cortes de rutas internacionales; el corte de la ruta 11 por parte de un grupo de vecinos y turistas del balneario bonaerense de Las Toninas, en reclamo de obras y mejores accesos; el corte de la ruta 2, el martes último, efectuado por empleados de la ex empresa Gándara para pedir el pago de cuatro meses de sueldos atrasados y el aguinaldo 2005, que terminó en disturbios y un embotellamiento de 6 km de largo, y, finalmente, ayer mismo, las renovadas protestas de los empleados de Southern Winds en la avenida Costanera y de miembros de tres organizaciones de piqueteros del sector duro, que causaron las consabidas demoras en la zona del centro porteño. Sin embargo, la lista es más larga y, a no dudarlo, se mantendrá en los próximos días y, ¿por qué no?, meses. No es la primera vez que desde estas columnas nos referimos a esta reiteración de una metodología que, la mayoría de las veces, sólo ha contribuido a generar más y más problemas, tanto por las derivaciones violentas que tuvo como por la repetida actitud permisiva de las autoridades de turno. Pero*

ahora lo que debe ser motivo de mayor preocupación es que un método de protesta abiertamente ilegal parece haberse convertido en la única forma de reclamo posible, y esto es grave" (LN 4/2).

Seguidamente, nuevamente es Busti, en tres oportunidades, quien ataca los cortes: *"Son un error... la metodología debe ser revisada"* (LN 4/2); *"Hay que dar una tregua para que el gobierno nacional pueda abrir instancias de negociación"* (LN 5/2); y *"Los cortes están entorpeciendo las gestiones"* (C 6/2).

Mientras tanto, la Asamblea de Gualaguaychú decidía un nuevo corte por tiempo indeterminado, que hasta el cierre de esta edición, un mes después, no fue levantado. Asimismo, comenzaba el regreso de los camiones hacia Chile, sin haber podido cumplir la misión de realizar la entrega de los materiales (LN 4/2).

Al otro día, el gobernador se reúne en Buenos Aires con el presidente Kirchner, y al salir de dicho encuentro realiza un giro en su discurso, tomando el reclamo de la Asamblea de primero parar la construcción, y después dialogar: *"La Argentina no dialogará con Uruguay hasta tanto no se haga un estudio de impacto ambiental serio e imparcial y hasta tanto no se paralicen las obras de las dos plantas. Otra forma de acuerdo no puede haber"* (LN 8/2), y esa noche, en la Asamblea, se pide una audiencia con Kirchner (C 8/2).

La Nación, nuevamente desde su columna editorial, observa el cambio de argumentos, y advierte: *"Es imperioso desterrar la cultura del piquete violento que, aunque la autoridades no lo admitan, ha sido alentada no pocas veces desde despachos oficiales y judiciales. Basta observar el apoyo que, en principio, se brindó a quienes se oponen a la instalación de dos papeleras en Uruguay, cortando rutas y puentes y violando derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, como los de libre tránsito, comercio y trabajo"* (LN 8/2).

Mientras tanto, en Uruguay, la Asamblea Ciudadana de Fray Bentos planea cortar el puente también del lado uruguayo en sintonía con su par de Gualaguaychú, y el ministro del Interior oriental amenaza: *"Si se cortan las rutas, la policía hará circular a los manifestantes con uso gradual de la fuerza"* (C 8/2).

Y al día siguiente, el que editorializa advirtiendo sobre la *Grave evolución de los reclamos sociales* es Clarín: *"En el caso de los reiterados cortes de Gualaguaychú el propio gobierno de Entre Ríos alentó las acciones, ante una actitud tolerante del Gobierno nacional, a pesar del daño que provocan a muchos ciudadanos y a la relación con Uruguay. El mencionado permisivismo es una respuesta fácil que puede evitar problemas de algún caso puntual pero sólo contribuye a permitir la escalada de abusos que pueden, como ha sucedido, derivar en violencia"* (C 9/2).

Un día más tarde, el presidente uruguayo Vázquez pide públicamente que se levanten los cortes para comenzar el diálogo (C 10/2), mientras Kirchner se reúne con los asambleístas, a pesar de las versiones que señalaban días anteriores como condicionante para dicho encuentro el levantamiento de la medida de fuerza. Tras el encuentro, Kirchner no hace declaraciones, convirtiendo a

los asambleístas presentes en la reunión en ocasionales voceros: *“El Presidente respeta la protesta y la forma de manifestarse de la gente de Gualaquaychú”, aseguró Oscar Bargas, uno de los asambleístas. “El presidente nos está acompañando, no va a haber represión”, coincidió Ana Angelini, también presente en la reunión (C 10/2).*

Cinco días después, un informe de la cancillería, leído públicamente por el canciller Jorge Taiana, acusa al Uruguay de violar, en tres oportunidades, un tratado binacional del año 1975.

Y el 16 de febrero, nuevamente La Nación editorializa sobre el conflicto, oponiéndose a la unión de los argumentos de asambleístas y gobierno: *“A los sectores ambientalistas de Gualaquaychú que mantienen bloqueado el puente General San Martín sobre el río Uruguay corresponde atribuirles una responsabilidad importante por el artificioso problema diplomático que se ha creado. Pero mudísimo más alta es, sin duda, la cuota de responsabilidad que les cabe a las autoridades nacionales argentinas – y también al gobierno provincial de Entre Ríos – por haber estimulado y alentado lo que en cualquier otro momento de la historia habría resultado impensable: el irracional intento de generar una crisis de aislamiento entre los dos países más entrañablemente unidos de la historia latinoamericana. Fue realmente lamentable que el jefe de Gabinete recibiera en su despacho a los grupos responsables del reprochable bloqueo de las vías de comunicación con Uruguay y fue mucho más reprochable aún que el propio presidente Kirchner se sumara a la reunión” (LN 16/2).*

Al día siguiente, la Asamblea de Colón decide cortar el puente que une esa ciudad con Paysandú, también por tiempo indeterminado (LN 16/2), llevando al cierre de esta edición 18 días de corte.

A partir de entonces, las papeleras deciden salir a dar explicaciones, pero las negociaciones permanecerán en punto muerto durante 10 días. El diálogo no recommienza si, según las Asambleas, continúa la construcción, y según el gobierno uruguayo, las rutas están cortadas.

El 28 de febrero, en su discurso en el Congreso ante ambas cámaras, Kirchner le pide públicamente a Vázquez que frene la construcción por 90 días, y así poder realizar un estudio ambiental serio e imparcial. La respuesta de Uruguay es rápida y negativa. Su vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, califica al pedido de “impertinente” (LN 2/3).

Unos días más tarde, el gobernador Busti pide levantar el corte por 30 días para permitir el diálogo, y una multitudinaria asamblea, esa misma noche, rechaza el pedido. En la misma información, el diario La Nación reproduce una frase del discurso de un asambleísta, que parece sintetizar la situación: *“Le agradecemos al gobernador Busti que hable, porque cada vez que lo hace viene más gente a cortar la ruta” (LN 4/3).*

La situación lleva a que el editorialista de La Nación, una vez más, deba ocuparse del tema: *“Resulta inaceptable que el propio gobierno argentino reciba a los piqueteros de Gualaquaychú y que, por esa vía, respalde o continúe apoyando la ejecución de medidas de fuerza ilegales que importan un completo desprecio por el derecho de los ciudadanos de ambos países de transitar libremente por sus territorios y que intentan llevar a las dos naciones a una situación de aislamiento (...). Estas cuestiones deben manejarse con racionalidad, no pueden quedar ancrunscriptas al terreno de las emociones colectivas, del mismo modo que la política exterior de un país no puede estar condicionada a la acción de un grupo de piqueteros” (LN 4/3).*

Al día siguiente, es el propio Busti el que amenaza con que *“agotadas todas las instancias de diálogo y como último recurso para levantar los cortes se presentaría un recurso judicial para pedir la transitabilidad de la ruta” (LN 5/3).* Y la respuesta fue casi inmediata: la Asamblea convocó a una caravana que reunió a 10 mil vecinos, dándole la razón al asambleísta citado más arriba.

Así está la situación al cierre de este *Análisis...* A mayor grado de movilización, más obligado se ve el poder de turno de accionar en el sentido exigido. Al mismo tiempo, cuando una causa logra involucrar al conjunto de la población, como lo demuestra el trabajo de organización realizado en Gualaquaychú, las presiones gubernamentales suelen ser respondidas con mayor movilización popular.

Sin embargo, más allá del curso que tome el conflicto, lo cierto es que la situación planteada no tiene solución, al menos no dentro del marco de lo existente. Porque si bien se pueden tomar recaudos cuando se realiza una inversión, la lógica imperante requiere que el capital esté primero, por sobre el resto de las cosas. Por lo tanto, resulta impensado que una inversión pueda volver atrás, que el capital deje de buscar su mayor ganancia, porque vecinos se oponen, aun sin saber que a lo que se están oponiendo, precisamente, es al capital. Aun cuando como en este caso ello tome la forma de una pelea por el medio ambiente, por “la vida”, como gustan llamarla los asambleístas.

Y por todo esto, es también imposible que se instalen de todas maneras allí las papeleras y pongan primero la vida y el medio ambiente, y luego su ganancia. Aun cuando decidan invertir millones en sistemas más eficientes. De hecho, esa es la propuesta que Greenpeace acercó a la Asamblea y a los gobiernos; que se invierta más en seguridad ambiental. La asamblea, quizá sin plena conciencia de lo que esto significaba, aceptó el apoyo de Greenpeace, pero rechazó la propuesta, oponiéndose por completo a la instalación de las fábricas, aun si estas deciden invertir mayor cantidad de capital en soluciones ambientales.